

EL DERECHO AMBIENTAL EN CATALUÑA (pp. 2-43)

—

EL DRET AMBIENTAL A CATALUNYA (pp. 44-83)

LUCÍA CASADO CASADO

Profesora titular de Derecho Administrativo / Professora titular de Dret Administratiu

Universitat Rovira i Virgili

—

Investigadora

Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona

Sumario. 1. Derecho estatal de aplicación en Cataluña. 1.1. Novedades de interés en materia nuclear. A. Una nueva ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radioactivos. B. El establecimiento de normas de protección física de las instalaciones y los materiales nucleares y de las fuentes radiactivas. 1.2. Una nueva ley para regular los residuos y los suelos contaminados. 1.3. La fijación del orden de prioridad y el calendario para la exigencia de la garantía financiera obligatoria de los riesgos medioambientales. 1.4. Otras novedades en algunos sectores ambientales. A. Protección de la atmósfera. B. Aguas. C. Patrimonio natural y biodiversidad. D. Desarrollo sostenible en el medio rural. 1.5. Novedades en el ámbito organizativo. 1.6. Otras normas de interés. A. Algunos ajustes en materia de silencio administrativo y licencias locales de actividad. B. Otras normas ambientales sectoriales. 2. Derecho y políticas ambientales autonómicas. 2.1. La normativa ambiental: aspectos más destacables. A. La Ley 7/2011, de 27 de julio, de Medidas Fiscales y Financieras, y su proyección en materia ambiental. B. Los cambios organizativos: la reestructuración del Departamento de Territorio y Sostenibilidad y del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural. C. Otras normas de interés. 2.2. La actividad de fomento: convocatoria de subvenciones y ayudas públicas en ámbitos diversos. 2.3. Algunas iniciativas ambientales de interés. A. La aprobación del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los Edificios y Equipamientos de la Generalitat de Cataluña 2011-2014. B. Primeros pasos para la elaboración del Plan de la Energía y del Cambio Climático de Cataluña 2012-2020. C. El Plan de Apoyo al Tercer Sector Ambiental 2011-2014 y el Plan de Mejora de la Calidad del Aire 2011-2015 continúan su andadura. 2.4. Las reformas legales que se avecinan: la próxima modificación de numerosas normas ambientales. 3. Derecho local ambiental. 3.1. Una nueva ordenanza de medio ambiente para Barcelona. 3.2. Otras ordenanzas municipales de interés. 3.3. Otras iniciativas destacables.

1. Derecho estatal de aplicación en Cataluña

La actividad normativa desarrollada por el Estado en materia de protección del medio ambiente durante el período objeto de análisis (de mayo a la primera quincena de octubre) ha sido intensa. Efectivamente, en estos meses se han aprobado dos leyes de gran trascendencia (la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radioactivos; y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados), a la vez que se han modificado preceptos concretos de otras leyes previas (en materia de prevención y control integrados de la contaminación, aguas, ruido...) con el fin de revisar las licencias municipales en ellas previstas y suprimir aquellas cuyo mantenimiento no se justifica con arreglo al nuevo artículo 84 bis de la Ley de Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Asimismo, como viene siendo habitual, se ha adoptado un número importante de normas reglamentarias en ámbitos diversos (responsabilidad medioambiental, protección de la atmósfera, aguas, patrimonio natural y biodiversidad, desarrollo sostenible en el medio rural...).

En este período continúa evidenciándose la conflictividad competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en algunos ámbitos. Así lo ponen de manifiesto el conflicto positivo de competencia núm. 2900/2011, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con determinados preceptos del Real Decreto

102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire¹; y el conflicto positivo de competencia núm. 3769/2011, promovido por el Gobierno de Canarias contra el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas².

1.1. Novedades de interés en materia nuclear

En materia nuclear han visto la luz en este período la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radioactivos, y el Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares, y de la fuentes radiactivas.

A. Una nueva ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radioactivos

La Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radioactivos, dictada al amparo del artículo 149.1.8 CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar la legislación civil (con excepción del capítulo III del título I y del artículo 22.1, dictados al amparo del artículo 149.1.6 CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar la legislación procesal), se aprueba para regular la responsabilidad civil nuclear de conformidad con los convenios internacionales de responsabilidad civil en materia de energía nuclear de 29 de julio de 1960 —modificado por los protocolos de 28 de enero de 1964, de 16 de noviembre de 1982 y de 12 de enero de 2004 (Convenio de París)— y de 31 de enero de 1963, complementario al anterior —modificado por los protocolos de 28 de enero de 1964, de 16 de noviembre de 1982 y de 12 de enero de 2004 (Convenio de Bruselas)—, lo que se complementa con el establecimiento de un régimen específico de responsabilidad civil por los daños que puedan causar accidentes en los que se vean

¹ Este conflicto positivo de competencia ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional mediante Providencia de 7 de junio de 2011 (BOE núm. 143, de 16 de junio de 2011). *Vid.* también el Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias 4/2011, de 14 de abril, sobre el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire (DOGC núm. 5920, de 14 de julio de 2011).

² Este conflicto positivo de competencia ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional mediante Providencia de 19 de julio de 2011 (BOE núm. 178, de 26 de julio de 2011).

involucrados materiales radiactivos que no sean sustancias nucleares. Son las dos nuevas enmiendas a los convenios de París y Bruselas de 2004 las que han justificado una revisión en profundidad de algunos de los elementos básicos del régimen de responsabilidad civil nuclear, y han hecho necesaria una modificación sustancial de la legislación interna vigente para reflejar los cambios y concretar aquellas estipulaciones que, de conformidad con las disposiciones de los convenios, corresponde a los Estados contratantes determinar en sus legislaciones nacionales. La importancia de las modificaciones que habría que introducir en la Ley 25/1964, de 29 de abril, la especialidad de la materia, la intervención de diferentes órganos de la Administración en razón de sus competencias, y el hecho de que las actualizaciones de este régimen responden a necesidades y circunstancias propias de un ámbito que es independiente del resto de las materias que se regulan en dicha Ley han aconsejado su regulación mediante una norma específica.

Esta ley nace con un doble objeto. Por una parte, el establecimiento del régimen de responsabilidad civil por daños nucleares, sin perjuicio de lo estipulado en los convenios de París y Bruselas, cuyas cláusulas serán directamente aplicables a las instalaciones nucleares y a los transportes de sustancias nucleares³. Por otra, el establecimiento de un régimen específico de responsabilidad civil por daños causados por accidentes que provoquen la emisión de radiaciones ionizantes que pudieran producirse en el manejo, almacenamiento y transporte de materiales radiactivos que no sean sustancias nucleares⁴.

Con esta finalidad, se estructura en un título preliminar y dos títulos, una disposición derogatoria, seis disposiciones finales y un anexo. El título preliminar contempla las disposiciones de carácter general de la Ley: objeto, ámbito de aplicación y definiciones. El título I regula el régimen de la responsabilidad civil por daños nucleares y está

³ Como se hace constar en la exposición de motivos de la Ley: “La norma se ha redactado de manera que, en lo que se refiere a los daños nucleares, al margen de las disposiciones de carácter general, sólo se regulan de forma expresa aquellos aspectos que, de conformidad con los Convenios de París o de Bruselas, quedan a la iniciativa de los Estados contratantes en sus legislaciones nacionales, remitiendo al texto de los convenios para todo aquello que es de aplicación directa”.

⁴ Debe tenerse en cuenta que se producirá en la fecha en que entren en vigor en España el Protocolo de 12 de febrero de 2004, por el que se modifica el Convenio de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares (Convenio de París), y el Protocolo de 12 de febrero de 2004, por el que se modifica el Convenio complementario al anterior (Convenio de Bruselas), salvo lo establecido en la disposición adicional segunda, relativa a la modificación del Impuesto de Sociedades, la disposición adicional tercera, por la que se modifica la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, y la disposición final sexta, que modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, que entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el *Boletín Oficial del Estado*.

estructurado en tres capítulos. En su capítulo I se determina la forma y cuantía de la responsabilidad civil de los explotadores de instalaciones nucleares por los daños nucleares que se produzcan tanto dentro como fuera del territorio nacional. También se contemplan los daños excluidos, las condiciones bajo las que puede aplicarse el derecho de repetición del explotador responsable y la subsistencia de la responsabilidad del explotador por los daños nucleares causados por sustancias nucleares extraviadas o abandonadas, así como cuando hayan sido objeto de robo o de hurto. El capítulo II del título I regula la obligación de los explotadores de establecer una garantía financiera por la responsabilidad civil que les atribuye la Ley y los procedimientos válidos para su establecimiento. Finalmente, el capítulo III contempla el procedimiento para la reclamación de las indemnizaciones, remitiendo a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de la aplicación de otros mecanismos de resolución de conflictos que puedan acelerar el pago de las indemnizaciones a las víctimas. Por último, se enumeran los plazos de garantía y prescripción de los daños nucleares.

El título II regula la responsabilidad civil por los daños que pudieran producir las instalaciones radiactivas en el manejo, almacenamiento o transporte de los materiales radiactivos que no sean sustancias nucleares, estableciendo procedimientos diferenciados según si los daños se producen a personas, a bienes o al medio ambiente, o por las pérdidas económicas asociadas. En el anexo figura la asignación de los límites inferiores por los que se deberá establecer la garantía para responder de los daños producidos por los materiales radiactivos que no sean sustancias nucleares en función de su actividad. En el caso de que el explotador de una instalación radiactiva sea un organismo de titularidad pública, no estará obligado a establecer garantía financiera alguna, pero quedará obligado a satisfacer las indemnizaciones que le correspondan.

Por último, debe resaltarse que la disposición adicional primera ordena al Gobierno, en el plazo de seis meses y de acuerdo con la Generalitat de Cataluña, adecuar el Plan Básico de Emergencia Nuclear para la creación de una estructura directiva coordinada para el Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona y el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Tarragona, dentro de la estructura orgánica de la Generalitat.

B. El establecimiento de normas de protección física de las instalaciones y los materiales nucleares y de las fuentes radiactivas

El Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares, y de la fuentes radiactivas, se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.25 y 29 de la CE, que atribuye al Estado la competencia sobre bases del régimen minero y energético y sobre la seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las comunidades autónomas en la forma que se establezca en los respectivos estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. Su fundamento legal se encuentra en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, que se refiere a las obligaciones en materia de protección física y que dispone que las autoridades competentes y los titulares deberán adoptar las medidas de prevención y protección necesarias para mantener las condiciones de seguridad física adecuadas en estas instalaciones.

Esta norma tiene por objeto el establecimiento de un régimen de protección física de las instalaciones nucleares, los materiales nucleares y las fuentes radiactivas que en ella se especifican y que se encuentren dentro del territorio español o bajo jurisdicción española, con el fin de proporcionar una protección contra el robo, el hurto u otra apropiación ilícita de materiales nucleares y fuentes radiactivas durante su utilización, almacenamiento y transporte; garantizar la aplicación de medidas adecuadas para localizar y, según corresponda, recuperar el material nuclear o las fuentes radiactivas perdidos o robados; proteger las instalaciones nucleares, los materiales nucleares y las fuentes radiactivas contra el sabotaje o cualquier otra actuación ilegal que pueda tener consecuencias radiológicas o perjudicar o alterar el normal funcionamiento de las instalaciones, y mitigar o reducir al mínimo las consecuencias radiológicas de un sabotaje.

Sus previsiones se aplican a las instalaciones nucleares, a los materiales nucleares durante su producción, utilización, manipulación, procesado, almacenamiento y transporte por el territorio español, o en un buque o aeronave bajo su jurisdicción si dicho buque o aeronave está dedicado al transporte a territorio nacional o desde este, y a las fuentes radiactivas durante su producción, utilización, manipulación, procesado, almacenamiento y transporte por el territorio español. No se aplican, sin embargo, a los materiales nucleares ni a las fuentes radiactivas utilizados o almacenados para la defensa u otros fines militares, ni a las instalaciones nucleares destinadas a estos

mismos fines, ni a los transportes de fuentes radiactivas que se realicen por vía aérea y marítima, que se registrarán por su normativa específica. Se trata, en definitiva, de impedir que estas instalaciones o materiales puedan ser objeto de sabotaje, robo o desvío para su uso indebido. Como establece el preámbulo del Real Decreto 1308/2011: “La protección física de las instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas, tiene gran importancia para la protección de la población y del medio ambiente y para la seguridad nacional e internacional; desempeña un papel fundamental en el apoyo a los objetivos de no proliferación nuclear y de lucha contra el terrorismo; y constituye un instrumento esencial para hacer frente a los eventuales peligros que pueden plantear la apropiación indebida, el tráfico y el uso ilícito de materiales nucleares y radiactivos, y el sabotaje de instalaciones nucleares, que puedan dar lugar a la liberación de radiactividad, o a la dispersión de contaminación radiactiva”. De ahí que el Real Decreto articule una serie de medidas de prevención y protección necesarias para mantener las condiciones de seguridad física adecuadas de las instalaciones y los materiales nucleares y de las fuentes radiactivas. En particular, además de determinar las autoridades competentes y sus competencias en este ámbito, fija las obligaciones en materia de protección física de las instalaciones nucleares y de los materiales nucleares y sus transportes, regula las autorizaciones de protección física y establece las obligaciones en materia de protección física de las fuentes radiactivas. También fija las medidas de protección física de las centrales y otras instalaciones nucleares, así como de las fuentes radiactivas y de los transportes de materiales nucleares y fuentes radiactivas, e incorpora algunas referencias al tráfico ilícito de los materiales nucleares y radiactivos. Incluye, asimismo, previsiones sobre inspección y control e infracciones y sanciones administrativas en este ámbito.

1.2. Una nueva ley para regular los residuos y los suelos contaminados

El 29 de julio de 2011 se publicaba en el BOE una importante ley: la 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados⁵, que deroga la anterior Ley 10/1998, de 21

⁵ Sobre esta norma pueden verse los comentarios de ALENZA GARCÍA, J. F., “Características, novedades y carencias en el Proyecto de (nueva) Ley de residuos y suelos contaminados”, *Actualidad Jurídica Ambiental*, 11 de julio de 2011 (accesible en http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2011/07/2011_07_Alenza_residuos.pdf —último acceso el 15 de octubre de 2011—); y POVEDA GÓMEZ, P. y LOZANO CUTANDA, B., “Principales novedades de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados”, *Diario la Ley* núm. 7702, 2011.

de abril, de Residuos, así como algunos preceptos de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases⁶. Esta ley tiene en su mayor parte el carácter de legislación básica de protección del medio ambiente⁷ y se aprueba con el fin de incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 —transposición tardía en la medida en que el plazo de incorporación de la Directiva al derecho nacional finalizó el 12 de diciembre de 2010—. La necesaria modificación del marco legislativo interno en materia de residuos para su adaptación al derecho europeo supone también una oportunidad para introducir cambios y actualizar y mejorar el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos previsto en la anterior Ley 10/1998, a la luz de la experiencia adquirida y de la evolución de la política de residuos.

La Ley 22/2011 tiene como objeto “regular la gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos”. Asimismo, tal y como sucedía ya en la anterior Ley de Residuos, incluye la regulación del régimen jurídico de los suelos contaminados.

La Ley, integrada por 56 artículos, se estructura en siete títulos (título I, “Disposiciones y principios generales”; II, “Instrumentos de la política de residuos”; III, “Producción, posesión y gestión de los residuos”; IV, “Responsabilidad ampliada del productor del producto”; V, “Suelos contaminados”; VI, “Información sobre residuos”, y VII,

⁶ Con arreglo a la disposición derogatoria única, se deroga el capítulo VII sobre régimen sancionador y la disposición adicional quinta de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Los restantes preceptos, en lo que no se opongan a esta ley, permanecen vigentes con rango reglamentario (apartado 2).

⁷ Con la excepción de los artículos siguientes (conforme a la disposición final primera de la Ley 22/2011):

- Los artículos 12.5 y 14.3, la disposición transitoria segunda y la disposición transitoria tercera, que tienen el carácter de legislación sobre bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, de acuerdo con el artículo 149.1.18 de la Constitución.

- Los artículos 12.3.b), 26 y 46, apartados 2.j), 3.g) y 3.h), en lo que respecta al traslado de residuos desde o hacia países terceros no miembros de la Unión Europea, que tienen el carácter de legislación sobre comercio exterior, competencia exclusiva del Estado, de acuerdo con el artículo 149.1.10 de la Constitución.

- Los artículos 17.7, 20.4.b) y c), 23.2, 32.5.d), que se dictan al amparo del artículo 149.1.11 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases de la ordenación de los seguros.

- Los artículos 33.2, inciso final, y 34.3 en lo que se refiere a la inscripción de notas marginales en el Registro de la Propiedad, que se dictan al amparo del artículo 149.1.8, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de ordenación de los registros públicos.

No tienen carácter básico los artículos 35.2 y 49.2, que serán de aplicación a la Administración general del Estado.

“Responsabilidad, vigilancia, inspección, control y régimen sancionador”), quince disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única, cuatro disposiciones finales y doce anexos.

El título I de la Ley contiene las disposiciones y los principios generales y en él se incluyen el objeto, el ámbito de aplicación, las definiciones —en su mayor parte procedentes de la Directiva y mejores respecto a la Ley anterior, por la mayor precisión de algunos conceptos— y las referencias a la clasificación y la Lista Europea de Residuos, así como a los subproductos y al fin de la condición de residuo. Una de las novedades importantes es la desaparición del concepto de residuo urbano, recogiendo ahora tres categorías de residuos: los domésticos, los comerciales y los industriales. También se determinan los principios de la política de residuos, configurándose como principio básico la protección de la salud humana y el medio ambiente; se formula una nueva jerarquía de residuos que explicita el orden de prioridad en las actuaciones en la política de residuos (prevención en la generación, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización, incluida la valorización energética, y eliminación), y se definen las competencias administrativas de la Administración general del Estado, las comunidades autónomas y los entes locales, creándose también la Comisión de Coordinación en materia de Residuos, adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, como órgano de cooperación técnica y colaboración entre las administraciones competentes en este ámbito.

El título II está dedicado a los instrumentos de la política de residuos. En él se regulan los planes y programas de gestión de residuos y los programas de prevención de residuos. También se prevé la posibilidad de adoptar medidas e instrumentos económicos, entre los que destacan los cánones aplicables al vertido de residuos mediante depósito en vertedero y a la incineración de residuos domésticos.

En el título siguiente se regulan la producción, posesión y gestión de los residuos, y se desarrollan las obligaciones de los productores y gestores de residuos. El objetivo ha sido doble: lograr una mayor claridad y sistematización de las obligaciones de los sujetos intervinientes en la cadena de producción y gestión de residuos, y una simplificación de las cargas administrativas sobre los operadores, sustituyendo parte de las autorizaciones existentes en la anterior Ley por comunicaciones previas, en el contexto de liberalización y simplificación administrativa derivadas de la Directiva de Servicios en el mercado interior.

El título IV se dedica a la responsabilidad ampliada del productor del producto que con el uso se convierte en residuo. De este modo, como se prevé en la exposición de motivos de la Ley, “los productores de productos que con su uso se convierten en residuos quedan involucrados en la prevención y en la organización de la gestión de los mismos, promoviéndose la reutilización, el reciclado y la valorización de residuos, de acuerdo con los principios inspiradores de esta nueva legislación”. La Ley delimita el ámbito de esta responsabilidad, estableciendo las obligaciones a las que, mediante el correspondiente desarrollo reglamentario, pueden quedar sometidos los productores, tanto en la fase de diseño y producción de sus productos como durante la gestión de los residuos que deriven de su uso. De esta forma se amplía el enfoque regulatorio, que deja de estar centrado exclusivamente en la gestión de los residuos para contemplar también las fases anteriores y adoptar un enfoque integral de todo el ciclo de vida de los productos.

El título siguiente regula los suelos contaminados, al igual que ya hiciera la Ley 10/1998, si bien a la luz de la experiencia adquirida se matiza la determinación de los sujetos responsables de la contaminación de los suelos. Como novedad, en la Ley se regulan los inventarios de suelos contaminados y se introduce la recuperación voluntaria de suelos.

En el título VI se regulan el Registro de producción y gestión de residuos, que será compartido y único en todo el territorio nacional y que incorpora la información procedente de los registros de las comunidades autónomas, y el Archivo cronológico, del que deberán disponer las personas físicas o jurídicas registradas y donde se anotará la información relativa a las operaciones de producción y gestión de residuos. Asimismo, se recogen una serie de obligaciones de información en este ámbito, tanto para las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido una autorización o hayan realizado una comunicación previa como para las propias administraciones públicas.

El título VII regula la responsabilidad, la vigilancia, la inspección y control y el régimen sancionador aplicable en este sector. En consonancia con la supresión de determinadas autorizaciones administrativas y su sustitución por una comunicación previa al inicio de las actividades, la Ley refuerza las potestades de las administraciones públicas para la inspección, la vigilancia y el control de las actividades relacionadas con los residuos y los suelos contaminados. En cuanto al régimen sancionador, se actualiza el contenido de la anterior Ley 10/1998; se tipifican con mayor precisión algunas infracciones

administrativas; se revisa la cuantía de las sanciones, atendiendo a la gravedad de las conductas; se amplía la potestad sancionadora de las entidades locales; se recoge la posibilidad de adopción de medidas provisionales con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador; se incorporan medidas de restablecimiento de la legalidad ambiental, y se introduce la obligación de reparación de los daños medioambientales en los términos de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Por último, debe tenerse en cuenta que las comunidades autónomas deberán adaptar a lo establecido en esta ley las autorizaciones y comunicaciones de las instalaciones y actividades ya existentes, o las solicitudes y comunicaciones que se hayan presentado antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley, en el plazo de un año desde esa fecha.

1.3. La fijación del orden de prioridad y el calendario para la exigencia de la garantía financiera obligatoria de los riesgos medioambientales

En materia de responsabilidad ambiental ha sido aprobada una norma de gran importancia para la implantación de la exigencia de la garantía financiera obligatoria de los riesgos medioambientales: la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23 CE. Esta norma establece el orden de prioridad y el calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales previstas en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en las que se fijará la fecha a partir de la cual será exigible la garantía financiera obligatoria de las actividades económicas y profesionales del anexo III de esta. Recordemos que, aunque la Ley 26/2007 establece para los operadores incluidos en su anexo III la obligación de constituir garantías financieras por responsabilidad ambiental, hace depender esta exigencia de la aprobación, por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de las órdenes que se aprobarán a estos efectos — previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y previa consulta a las comunidades autónomas y a los sectores afectados— y que fijarán la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de tal garantía financiera.

En este contexto, esta orden ministerial establece el orden de prioridad y un calendario gradual para la elaboración de las órdenes ministeriales por las que se fijará la fecha a partir de la cual será exigible la garantía financiera obligatoria, incluyendo una priorización de las actividades económicas del anexo III de la Ley 26/2007 a las que se

exigirá dicha garantía. Con ello se ponen de manifiesto los plazos y calendarios previstos por la Administración para el conocimiento de los sectores afectados y el incremento de la seguridad jurídica en la aplicación de la garantía financiera de responsabilidad medioambiental.

En cuanto al orden de prioridad para la exigencia de la garantía financiera obligatoria de los sectores de actividad, este se establece en el anexo. En función del sector, a las actividades afectadas se les asocia un número que indica el nivel de prioridad. El nivel 1 indica el nivel de prioridad máximo; el 2, el nivel de prioridad medio, y el 3, el nivel de prioridad más bajo. En el nivel 1 se incluyen únicamente dos instalaciones del anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión superior a 50 MW e instalaciones para la valoración de residuos peligrosos, incluida la gestión de aceites usados, o para la eliminación de dichos residuos en lugares distintos de los vertederos, de una capacidad de más de 10 toneladas por día). Se adscriben, asimismo, a esta categoría los operadores incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, con independencia de la prioridad asignada al sector profesional al que cada uno pertenezca. En el nivel 2 se recogen las coquerías; el refinado de petróleo; las instalaciones químicas para la fabricación, a escala industrial mediante transformación química, de sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico, el carbonato sódico, los perboratos y el nitrato argéntico; las instalaciones químicas para la fabricación de explosivos; las instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico para la fabricación de medicamentos de base; las instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos, incluidas las correspondientes instalaciones de fundición continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora; las fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 toneladas por día; las instalaciones para la transformación de metales ferrosos mediante aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de tratamiento de más de 2 toneladas de acero bruto por hora, y los vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas, con exclusión de los vertederos de residuos inertes. Y en el nivel III, que es el mayoritario, el resto de actividades del anexo III de la Ley 26/2007.

En relación con el calendario, se prevé que la publicación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria de los sectores de actividad que estén clasificados con el nivel de prioridad 1 en el anexo se producirá entre los dos y tres años siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta orden (30 de junio de 2011); los que estén clasificados con el nivel 2, entre los tres y cinco años siguientes a la mencionada fecha, y los clasificados con el nivel 3, entre los cinco y ocho años siguientes a tal fecha.

Este calendario orienta asimismo sobre los plazos para la realización, por parte del operador, de los análisis de riesgos medioambientales necesarios para el cálculo de la cuantía de la garantía financiera prevista en el capítulo III del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre. Estos análisis de riesgos deberán llevarse a cabo con carácter obligatorio una vez publicadas las citadas órdenes ministeriales, tal y como establece la disposición final primera del mencionado Reglamento, si bien los modelos de informe de riesgos ambientales tipo de cada sector o, en su caso, la guía metodológica correspondiente deberán estar elaborados antes de las citadas órdenes.

1.4. Otras novedades en algunos sectores ambientales

En el período estudiado, además de las ya analizadas, se han aprobado a nivel estatal un gran número de normas sectoriales ambientales. A continuación se señalan las principales normas reglamentarias —y también alguna con rango de ley— aprobadas en los sectores de protección de la atmósfera, aguas y patrimonio natural y biodiversidad y desarrollo sostenible en el medio rural.

A. Protección de la atmósfera

En materia de protección de la atmósfera se ha aprobado el Real Decreto 687/2011, de 13 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo. Esta modificación del Real Decreto 430/2004 se realiza con el fin de subsanar la incorporación incompleta de la Directiva 2001/80/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, al ordenamiento jurídico español.

Son tres los cambios que se producen. En primer lugar, se modifica el artículo 5 del Real Decreto 430/2004 para cambiar el ámbito temporal de aplicación fijado, del 21 de marzo de 2004 al 27 de noviembre de 2002. Se prevé ahora lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta, en la autorización sustantiva inicial de construcción de las nuevas instalaciones o, en su defecto, en la autorización sustantiva inicial de explotación de éstas, cuya solicitud de autorización se presente antes del 27 de noviembre de 2002, a condición de que la instalación se ponga en funcionamiento, a más tardar, un año después de dicha fecha, se establecerán los valores límite de emisión que correspondan a sus emisiones de dióxido de azufre, de óxidos de nitrógeno y de partículas, determinados de acuerdo con lo establecido en el apartado A de los anexos III a VII”.

En segundo lugar, se modifica la disposición transitoria tercera para adecuar sus previsiones a la Directiva 2001/80/CE. Como el Real Decreto 430/2004 entró en vigor con posterioridad a la fecha de aplicación de la Directiva, sin prever la aplicación retroactiva, dejó fuera de su ámbito de aplicación las nuevas grandes instalaciones de combustión, y, en particular, las turbinas de gas autorizadas con posterioridad al 27 de noviembre de 2002 y antes del 21 de marzo de 2004. Ahora, con la nueva redacción de la disposición transitoria tercera, se excluyen de la aplicación del capítulo II las turbinas de gas autorizadas con anterioridad al 27 de noviembre de 2002 o que hayan sido objeto de una solicitud de autorización antes de dicha fecha, a condición de que la instalación se hubiera puesto en funcionamiento a más tardar el 27 de noviembre de 2003.

En tercer lugar, para ajustarse al texto de la citada Directiva, el Real Decreto da una redacción adecuada al apartado 5.1 de la parte A del anexo VIII del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, en lo relativo a la medición en continuo del contenido del vapor de agua de los gases residuales.

Por último, dado que no es posible establecer el cumplimiento desde el 27 de noviembre de 2002, el Real Decreto incorpora una disposición transitoria que fija un plazo de adaptación de las autorizaciones, con el fin de que las instalaciones afectadas puedan

cumplir lo dispuesto en la Directiva 2001/80 a partir de su entrada en vigor⁸.

B. Aguas

En materia de aguas, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del Convenio Internacional sobre el embargo preventivo de buques y se regulan competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico⁹. Mediante dicho Real Decreto-ley se introduce una nueva disposición adicional (la decimocuarta) en el texto refundido de la Ley de Aguas, con la finalidad de conferir, a las comunidades autónomas que lo tengan previsto en sus estatutos de autonomía, el ejercicio de la competencia ejecutiva sobre las facultades de policía de dominio público hidráulico dentro de su ámbito territorial. Esta nueva disposición adicional prevé lo siguiente:

“En las cuencas hidrográficas intercomunitarias, corresponderá a las comunidades autónomas que tengan prevista la competencia ejecutiva sobre las facultades de policía de dominio público hidráulico en sus Estatutos de Autonomía, el ejercicio, dentro de su ámbito territorial, de las funciones señaladas en el apartado 2 del artículo 94 de esta Ley¹⁰, así como la tramitación de los procedimientos a que den lugar dichas actuaciones hasta la propuesta de resolución”.

En el ejercicio de estas funciones, será aplicable a los órganos competentes de las comunidades

⁸ Esta disposición transitoria prevé: “Para las nuevas instalaciones, y en particular las turbinas de gas, autorizadas, según el [artículo 5 del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo](#), en el periodo comprendido entre el 27 de noviembre de 2002 y el 21 de marzo de 2004, o que hayan sido objeto de una solicitud de autorización en dicho periodo y puestas en funcionamiento durante el periodo comprendido entre el 27 de noviembre de 2003 y el 21 de marzo de 2005, se dispondrá de un plazo de un año, a contar desde la entrada en vigor de este Real Decreto, para revisar y, en su caso, modificar sus autorizaciones, al objeto de adaptarlas a lo que se establece en este Real Decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en el [artículo 7.1](#) y en los [apartados A y B del anexo VIII del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo](#)”.

⁹ Téngase en cuenta la Resolución de 15 de septiembre de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del Convenio Internacional sobre el embargo preventivo de buques y se regulan competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico (BOE núm. 229, de 23 de septiembre de 2011).

¹⁰ Se trata de las funciones de inspección y control del dominio público hidráulico; inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico; realización de aforos, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas; inspección y vigilancia de las obras derivadas de las concesiones y autorizaciones de dominio público hidráulico; inspección y vigilancia de las explotaciones de todos los aprovechamientos de aguas públicas, cualquiera que sea su titularidad y el régimen jurídico al que están acogidos; la dirección de los servicios de guardería fluvial, y, en general, la aplicación de la normativa de policía de aguas y cauces.

autónomas lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 94.

Con esta medida, como se pone de manifiesto en la exposición de motivos, “se pretende dotar de mayor seguridad jurídica a las relaciones interadministrativas en materia de aguas, todo ello conforme a la reciente doctrina del Tribunal Constitucional contenida en la Sentencia 30/2011, de 16 de marzo”. También se procede a la declaración de interés general de determinadas obras de infraestructuras hidráulicas de modernización y consolidación de regadíos en Huelva por la necesidad urgente de racionalizar el uso del agua de riego en estas zonas y de impulsar el desarrollo de tales zonas.

También se ha aprobado, mediante el Real Decreto 1219/2011, de 5 de septiembre, dictado al amparo del artículo 149.1.13 de la CE y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.6 del texto refundido de la Ley de Aguas, el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, con el contenido incluido en los anexos I y II del Decreto 188/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat de Cataluña¹¹. Su ámbito territorial de aplicación coincide con el del distrito de cuenca fluvial de Cataluña, delimitado por el Decreto catalán 31/2009, de 24 de febrero. Este real decreto prevé, además, que las infraestructuras hidráulicas promovidas por la Administración general del Estado y previstas en el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña serán sometidas, previamente a su realización, a un análisis sobre su viabilidad técnica, económica y ambiental por parte de la Administración general del Estado. En cualquier caso, su construcción se supeditará a la normativa vigente sobre evaluación de impacto ambiental, a las previsiones presupuestarias y a los correspondientes planes sectoriales, cuando su normativa específica así lo prevea. Con la aprobación del Real Decreto citado se zanján las dudas que se habían suscitado en torno a la efectiva vigencia del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, en la medida en que faltaba la preceptiva aprobación por el Gobierno español¹².

C. Patrimonio natural y biodiversidad

En el ámbito del patrimonio natural y la biodiversidad se ha aprobado en este período el Real Decreto 649/2011, de 9 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 12/2008,

¹¹ Sobre este plan, *vid.* la crónica “El Derecho ambiental en Cataluña” del número anterior de esta revista.

¹² *Vid.* el artículo de Isabel CARO-PATÓN CARMONA, “¿Está aprobado el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña?”, en *Revista Catalana de Dret Ambiental*, vol. 2, núm. 1, 2011. Accesible en <http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/viewFile/190/669> (último acceso el 15 de octubre de 2011).

de 11 de enero, por el que se regulan la composición y el funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales, y el Real Decreto 948/2009, de 5 de junio, por el que se determinan la composición, las funciones y las normas de funcionamiento del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Estas modificaciones obedecen a la necesidad de adaptar la estructura del Consejo de la Red de Parques Nacionales y la del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad a la nueva realidad del Ministerio derivada de la aprobación del Real Decreto 1443/2010, de 5 de noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

También se ha aprobado, mediante el Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Este plan estratégico se configura como instrumento de planificación de la actividad de la Administración general del Estado en la materia, y tiene como objeto el establecimiento y la definición de objetivos, acciones y criterios que promuevan la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio, los recursos naturales terrestres y marinos, la biodiversidad y la geodiversidad. Con una extensión de más de 200 páginas en el BOE, desarrolla lo establecido en la Ley 42/2007 y se estructura en un preámbulo, nueve apartados (I, “Introducción”; II, “Marco de referencia”; III, “Principios del plan estratégico”; IV, “Perspectiva a largo plazo”; V, “Diagnóstico”; VI, “Metas, objetivos y acciones del plan estratégico”; VII, “Cooperación, colaboración y coordinación entre Administraciones”; VIII, “Integración sectorial, y IX, “Estimación de las necesidades presupuestarias) y dos anexos (anexo I, “Programa de seguimiento”, y anexo II, “Glosario”). Además, se alinea con los compromisos asumidos por España en la materia en el ámbito internacional y comunitario, en especial los derivados del Plan Estratégico del Convenio sobre la Diversidad Biológica para el Período 2011-2020, adoptado en la décima reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio, y de la estrategia europea sobre biodiversidad “Nuestro seguro de vida, nuestro capital natural: una estrategia de biodiversidad de la UE para 2020”, adoptada por la Comisión Europea en mayo de 2011.

Por último, debe mencionarse la Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria marinos de la región biogeográfica macaronésica de la red Natura 2000 y se aprueban

sus correspondientes medidas de conservación. Esta orden, dictada al amparo del artículo 149.1.23 CE, tiene una doble finalidad. Por una parte, reúne en una disposición tanto la declaración de las citadas zonas especiales de conservación como la aprobación de las medidas de conservación de estas zonas, que incluyen la regulación de usos y actividades y recomendaciones, así como los correspondientes planes de gestión, de acuerdo con los criterios de conservación y protección aplicables a los lugares de la red Natura 2000, para mayor claridad y seguridad jurídica. Por otra, también recoge algunas previsiones en torno a la gestión de estos espacios. Corresponde a la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal la concesión de las autorizaciones y la emisión de los informes que se requieran en virtud de las medidas de conservación establecidas, sin perjuicio de las autorizaciones que pudieran corresponder a otras administraciones y lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. Y será la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal la responsable de la puesta en marcha de la gestión de las zonas especiales de conservación declaradas por esta orden, en coordinación con las administraciones públicas competentes. También se prevé que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino promoverá la colaboración entre las administraciones públicas afectadas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de las medidas de conservación de las zonas especiales de conservación, pudiéndose articular esta colaboración a través de convenios entre las administraciones implicadas.

D. Desarrollo sostenible en el medio rural

Recientemente, el Consejo de Ministros ha regulado, mediante el Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre —dictado al amparo del artículo 149.1.13 CE—, el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural, incorporando esta figura al ordenamiento jurídico español¹³.

¹³ Aunque la normativa previa (Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, y Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014) ya contemplaba los contratos territoriales de zona rural como instrumento de articulación de una política de Estado, el Real Decreto 1336/2011 crea ahora un marco de regulación más amplio y de carácter más general para la figura del contrato territorial, concibiéndolo como auténtica medida o instrumento de política económica general para el medio rural español que con carácter versátil permita orientar las actividades agrarias desde un punto de vista multifuncional, retribuir las e incentivar las nuevas posibilidades de financiación que en lo sucesivo se presenten.

Los contratos territoriales se conciben como un instrumento de apoyo a las políticas de desarrollo rural sostenible, con la intención de orientar e incentivar las actividades agrarias, entendidas en un sentido lo más amplio posible, hacia la multifuncionalidad y la generación de externalidades positivas que contribuyan eficazmente a mejorar los aspectos económicos, sociales y ambientales que configuran la sostenibilidad del medio rural, todo ello bajo la aplicación de un enfoque territorial. Se pretende con ellos, como se pone de manifiesto en el preámbulo, “conformar un marco contractual mediante el cual los titulares de las explotaciones agrarias asuman desarrollar un modelo de actividad agraria que genere externalidades positivas en los ámbitos mencionados, y por el cual, en apreciación del interés público de dichas externalidades, las administraciones públicas competentes las compensan, incentivan y retribuyen, como forma de reconocimiento por la sociedad de los servicios y prestaciones de carácter público que generan las explotaciones agrarias más allá de la retribución derivada de la venta en el mercado de sus productos”.

Partiendo de estas premisas, este real decreto tiene como objeto regular con carácter básico los contratos territoriales que las administraciones públicas establezcan con los titulares de determinadas explotaciones agrarias, como instrumento de apoyo al desarrollo rural sostenible, y los contratos territoriales de zona rural que las administraciones públicas competentes establezcan con los titulares de las explotaciones agrarias de las zonas rurales incluidas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible referido en el artículo 5 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. Estos contratos, que podrán ser individuales o por tipos homogéneos, se configuran como un instrumento formal que establece el conjunto de compromisos suscritos entre una administración pública y el titular de una explotación agraria para orientar e incentivar su actividad en beneficio del desarrollo sostenible del medio rural; su suscripción tiene carácter voluntario, tanto para las comunidades autónomas que opten por ponerlos en práctica como para los titulares de las explotaciones agrarias. La finalidad que se persigue, como ya avanzábamos, es orientar la actividad de las explotaciones agrarias a la generación de externalidades positivas que contribuyan al desarrollo sostenible del medio rural. Las administraciones públicas procurarán orientar estos contratos, entre otras, a las siguientes finalidades: evitar la despoblación del medio rural; implantar una actividad agraria multifuncional; crear y conservar el empleo en el medio rural; mantener sistemas agrarios tradicionales de alto

valor natural o cultural; conservar y restaurar la calidad ambiental, el suelo, el agua, el patrimonio natural y la biodiversidad autóctona silvestre, la diversidad genética agraria de base territorial, el paisaje rural y el patrimonio cultural, y contribuir a la consecución de los objetivos de conservación de los espacios de la red Natura 2000 u otros espacios o áreas protegidas.

Con estas finalidades, el Real Decreto procede a regular de forma pormenorizada la tipología y el contenido de los contratos territoriales; los beneficiarios; la duración, los compromisos y las contraprestaciones del contrato; las prioridades entre beneficiarios para la suscripción de los contratos y niveles de incentivo; el procedimiento para la suscripción de los contratos, y el informe anual del estado de aplicación del contrato territorial que deberá elaborar el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a partir de la información facilitada por las comunidades autónomas. Asimismo, también contiene previsiones específicas sobre los contratos territoriales de zona rural previstos en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, que se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible aprobado por el Gobierno en aplicación de dicha Ley, y que tienen por ámbito territorial específico las zonas rurales incluidas en dicho programa a iniciativa de las comunidades autónomas.

1.5. Novedades en el ámbito organizativo

En el ámbito organizativo, debe destacarse la regulación, a través del Real Decreto 1025/2011, de 15 de julio, de la Comisión Delegada del Gobierno para el Cambio Climático, que ya había sido creada a través del Real Decreto 608/2008, de 30 de abril¹⁴. La Comisión Delegada está integrada por la vicepresidenta de Asuntos Económicos y ministra de Economía y Hacienda, que la presidirá; por el vicepresidente

¹⁴ Aunque no tiene interés para Cataluña, en materia organizativa también pueden mencionarse varias órdenes ministeriales de 7 de julio que han creado, dando cumplimiento al artículo 4 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea —modificado por la Ley 5/2010, de 17 de marzo—, las comisiones mixtas para el establecimiento de las servidumbres acústicas y el plan de acción de los aeropuertos de Alicante, Bilbao, Gran Canaria, Ibiza, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife Norte, Valencia y Málaga, como órganos colegiados de carácter interministerial adscritos al Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de Aviación Civil (órdenes PRE/1921/2011, PRE/1922/2011, PRE/1923/2011, PRE/1924/2011, PRE/1925/2011, PRE/1926/2011, PRE/1927/2011, PRE/1928/2011 y PRE/1929/2011, respectivamente). Más recientemente, a través de la Orden PRE/2686/2011, de 5 de octubre, se ha creado la Comisión de Seguimiento Ambiental del nuevo aeropuerto de la Región de Murcia, prevista en el apartado 5 de la Resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, de 30 de marzo de 2010, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto “Nuevo aeropuerto de la Región de Murcia, fase II”.

de Política Territorial y ministro de Política Territorial y Administraciones Públicas; por los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Interior, de Fomento, de Educación, de Industria, Turismo y Comercio, de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de Sanidad, Política Social e Igualdad, y de Ciencia e Innovación, y por los secretarios de Estado para la Unión Europea, de Cooperación Internacional, de Defensa, de Hacienda y Presupuestos, de Economía, de Seguridad, de Transportes, de Vivienda y Actuaciones Urbanas, de Comercio Exterior, de Energía, de Cambio Climático, de Cooperación Territorial y de Investigación. La Secretaría de Estado de Cambio Climático ejercerá las funciones de Secretaría de la Comisión Delegada del Gobierno para el Cambio Climático.

1.6. Otras normas de interés

Para finalizar el análisis de la normativa estatal dictada en este período, debe tenerse en cuenta el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, de interés por cuanto modifica algunas leyes ambientales. También cabe señalar otras normas reglamentarias dictadas en sectores ambientales o directa o indirectamente relacionadas.

A. Algunos ajustes en materia de silencio administrativo y licencias locales de actividad

El Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, a pesar de no tratarse de una norma ambiental, contiene previsiones de interés para este ámbito en materia de silencio administrativo y de licencias. En efecto, por una parte, el Real Decreto-ley, cumpliendo el mandato legal del artículo 40 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, fija el sentido positivo del silencio administrativo en un buen número de procedimientos administrativos iniciados a solicitud del interesado, entre los cuales se encuentran algunos de materia ambiental, con el fin de circunscribir el sentido negativo del silencio administrativo a aquellos procedimientos en que lo exijan razones

imperiosas de interés general. Así, por ejemplo, el silencio pasa de ser negativo a positivo en los procedimientos de autorización de agrupación de instalaciones regulados en el artículo 12 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero; y de autorización para los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada para el resto de las comunidades autónomas, regulado en el artículo 7 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Por otra, procede a la modificación de diversas leyes con el fin de revisar las licencias municipales previstas en la legislación estatal y suprimir aquellas en las que se considera que no concurren las razones enunciadas por el nuevo artículo 84 bis de la Ley de Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Con arreglo a este precepto, “con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. No obstante, podrán someterse a licencia o control preventivo aquellas actividades que afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público, siempre que la decisión de sometimiento esté justificada y resulte proporcionada. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una entidad local y alguna otra Administración, la entidad local deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente”. Mediante el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, se da cumplimiento a la disposición adicional octava de la Ley de Economía Sostenible, conforme a la cual, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Gobierno evaluaría la existencia de estas razones en las previsiones existentes sobre licencias locales de actividad y, de acuerdo con los resultados de dicha evaluación, presentaría en el mismo plazo un proyecto de ley de modificación de las normas en las que no concurren las razones citadas, eliminando la correspondiente exigencia de licencia, sin perjuicio de su sustitución por otras formas de verificación y control administrativo. Y esta es una de las tareas que ha acometido el Real Decreto-ley 8/2011. Concretamente, en materia ambiental, se modifican el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación; la Ley

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental; la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Las referencias efectuadas en estas leyes a las licencias se sustituyen ahora por expresiones como “actuaciones relativas a los medios de intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos” o similares. De las modificaciones efectuadas cabe destacar la supresión definitiva de la licencia municipal relativa al ejercicio de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en los casos en que se requiera autorización ambiental integrada, en la línea de lo que ya han hecho la mayoría de normas autonómicas.

Aparte de dichas modificaciones concretas, la disposición adicional séptima establece que, a excepción de las autorizaciones que se impongan en cumplimiento de la legislación de patrimonio de las administraciones públicas y de armas y explosivos, las menciones contenidas en la legislación estatal a las licencias o autorizaciones municipales relativas a la actividad, el funcionamiento o la apertura se entenderán referidas a los distintos medios de intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos, según los principios del artículo 39 bis de la Ley 30/1992 y contemplados en el artículo 84.1 LBRL.

B. Otras normas ambientales sectoriales

Asimismo, se han aprobado en este período varias normas reglamentarias, tanto en materias ambientales como en sectores directa o indirectamente relacionados con el medio ambiente. Dado el objetivo de esta crónica, no pueden enumerarse todas ellas, aunque sí destacamos el Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección de las infraestructuras críticas, en desarrollo de la Ley 8/2011, de 28 de abril, y algunas otras aprobadas en materia forestal (Real Decreto 1220/2011, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción), marítima (Real Decreto 799/2011, de 10 de junio, por el que se establecen las obligaciones que incumben al Ministerio de Fomento en materia de seguridad marítima y prevención de la contaminación marina sobre buques españoles; y Real Decreto 800/2011, de 10 de junio, por el que se regula la investigación de los accidentes e

incidentes marítimos y la Comisión permanente de investigación de accidentes e incidentes marítimos), de vehículos eléctricos (Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011, en el marco del Plan de Acción 2010-2012 del Plan Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en España 2010-2014), de sustancias y mezclas (Real Decreto 1237/2011, de 8 de septiembre, por el que se establece la aplicación de exenciones por razones de defensa, en materia de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento [CE] n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y en materia de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, de acuerdo con el Reglamento [CE] n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008) y biocidas (Orden PRE/2610/2011, de 27 de septiembre, por la que se incluye la sustancia activa espinosad en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas; y Orden PRE/2421/2011, de 7 de septiembre, por la que se amplía la inclusión de la sustancia activa dióxido de carbono al tipo de producto 18, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas).

Por último, se mencionan la Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones; y la Resolución de 14 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se incluye el hidrobiodiésel en el anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

2. Derecho y políticas ambientales autonómicas

El derecho y la política ambiental catalanas han tenido un desarrollo escaso en el período objeto de análisis, circunstancia que no debe extrañar si se tiene en cuenta que nos hallamos en los primeros meses de la legislatura y de la andadura del nuevo Gobierno surgido de las elecciones de noviembre del pasado año, y que en estos momentos las preocupaciones fundamentales se centran en lo económico y en la adopción de medidas de contención del gasto público.

A nivel normativo, la actividad ha sido prácticamente inexistente. Lo más destacable en este período es la Ley 7/2011, de 27 de julio, de Medidas Fiscales y Financieras, presentada junto con la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2011, y que, aunque no tiene como objeto principal la protección ambiental, incluye una serie de medidas fiscales y financieras de interés en este ámbito; y algunas normas de carácter organizativo relativas a la reestructuración de los dos departamentos de la Generalitat que aglutinan actualmente las competencias ambientales (Territorio y Sostenibilidad, y Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural).

También resultan de interés algunas actuaciones emprendidas, como la aprobación del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los Edificios y Equipamientos de la Generalitat de Cataluña 2011-2014, y el inicio del proceso de elaboración del Plan de la Energía y del Cambio Climático de Cataluña 2012-2020.

Sin embargo, lo más destacable en Cataluña en el período analizado, al margen de las cuestiones señaladas, ha sido, sin duda alguna, el debate surgido en torno al anteproyecto de Ley de simplificación, de agilidad y reestructuración administrativa y de promoción de la actividad económica —más conocido como Ley Ómnibus—, sometido a información pública mediante Edicto del Departamento de la Presidencia de 26 de mayo de 2011¹⁵, y que posteriormente ha sido troceado en tres proyectos de ley diferentes, actualmente en trámite en el Parlamento de Cataluña.

2.1. La normativa ambiental: aspectos más destacables

Son pocas las normas ambientales aprobadas en Cataluña durante los meses en que se centra esta crónica. Es más, normas ambientales propiamente dichas no se han aprobado en este período, sino que únicamente han visto la luz una ley cuyo objeto es el establecimiento de medidas fiscales y de medidas relativas al régimen jurídico de las finanzas públicas (la Ley 7/2011, de 27 de julio, de Medidas Fiscales y Financieras), pero que modifica algunas normas ambientales; algunas normas de carácter estrictamente organizativo, y un decreto que regula determinados aspectos del Cuerpo de Agentes Rurales.

A. La Ley 7/2011, de 27 de julio, de Medidas Fiscales y Financieras, y su proyección en materia ambiental

La Ley 7/2011, de 27 de julio, de Medidas Fiscales y Financieras, incluye algunas previsiones de interés desde la perspectiva ambiental. En primer lugar, modifica el artículo 15 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos, para cambiar el tipo de gravamen de los cánones sobre la disposición del

¹⁵ *Vid.* el DOGC núm. 5891, de 1 de junio de 2011.

desperdicio de los residuos municipales. También suspende durante dos años la aplicación del canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción regulado por la sección II del capítulo III de la Ley 8/2008, de 10 de julio (disposición adicional 1.^a).

En segundo lugar, modifica diversos preceptos del Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña (artículos 69, 71, 72 y 74, disposición adicional 1.^a, 5.^a, 6.^a y 9.^a y anexo 6), en relación con el Canon del Agua. De estas modificaciones destacan la fijación de un consumo básico de cien litros por persona y día y de una dotación básica de agua por vivienda de 9 m³; la subida del canon un 8,5% (el tipo de gravamen aplicable pasa de 0,3999 euros/m³ a 0,4339/m³ para consumos iguales o inferiores a la dotación básica por vivienda), y la creación de una tarifa social para jubilados y parados que no sobrepasen la dotación básica.

Por último, también introduce modificaciones en una serie de tasas, entre las que se incluyen algunas en el ámbito de la protección del medio ambiente, como las de emisión de las declaraciones de impacto ambiental y las resoluciones que determinan la innecesidad de someter un proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental; obtención de la etiqueta ecológica de la Unión Europea; servicios de autorización ambiental de actividades; prestación de servicios y realización de actividades relativas a la zona de servidumbre de protección, y tramitación de autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre o autorizaciones dentro del ámbito de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre.

B. Los cambios organizativos: la reestructuración del Departamento de Territorio y Sostenibilidad y del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural

El Decreto 336/2011, de 10 de mayo, que deroga el 48/2011, de 4 de enero, ha reestructurado el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural. Dentro de este departamento, por lo que aquí nos interesa, se encuentra la Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad. Esta dirección general se

estructura en cuatro subdirecciones generales (Bosques; Biodiversidad; Actividades Cinegéticas y Pesca Continental, y Agentes Rurales) y el Servicio de Gestión de Recursos; y a ella se adscriben el Consejo de Caza de Cataluña, el Consejo de Pesca Continental de Cataluña, los consejos territoriales de Pesca Continental y la Mesa Intersectorial Forestal. A esta dirección general corresponden, entre otras, las siguientes competencias: formular directrices en materia de medio natural relativas a su conservación y gestión, evaluar el grado de conservación y protección, y asumir, en su caso, la restauración y mejora, así como formular proyectos de investigación en tecnologías relacionadas con el medio natural; dirigir el desarrollo del Plan de Espacios de Interés Natural y de la Estrategia Catalana de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, y participar en la revisión del Plan; promover la declaración de los espacios de especial protección, informar favorablemente el establecimiento del régimen general y elaborar los planes especiales de protección de estos espacios; diseñar y dirigir las actuaciones en materia de protección y fomento de los terrenos forestales, parques naturales, espacios protegidos y protección de los animales y la flora, y velar por la protección de los ecosistemas de Cataluña; diseñar medidas en relación con los terrenos forestales, los espacios naturales protegidos, los espacios incluidos en la red Natura 2000, las reservas de caza y el resto de equipamientos destinados a la protección y mejora de las especies animales; elaborar y tramitar planes especiales de protección, planes de gestión y otros instrumentos en relación con los espacios naturales protegidos; coordinar las actuaciones de vigilancia, control e inspección del medio natural; planificar las actuaciones en materia de prevención de incendios forestales y aplicar medidas de silvicultura preventiva; y aprobar los planes de mejora para el desarrollo de la actividad forestal, cinegética y de pesca continental.

Por su parte, el Decreto 342/2011, de 17 de mayo, ha procedido a la reestructuración del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, derogando el anterior 44/2011, de 4 de enero. Tras esta reestructuración, este departamento, al que se adscriben la Agencia Catalana del Agua, la Agencia de Residuos de Cataluña, Aigües Ter Llobregat y el Servicio Meteorológico de Cataluña, mantiene la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad, con rango orgánico de secretaría general. De esta Secretaría dependen las unidades siguientes: la Dirección General de Calidad Ambiental (de ella dependen la Subdirección General de Intervención y Calificación Ambiental y la Subdirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica); la Dirección

General de Políticas Ambientales (de ella dependen la Subdirección General de Evaluación Ambiental, la Subdirección General de Información y Educación Ambiental, la Oficina Catalana del Cambio Climático y el Servicio de Planificación del Entorno Natural), y el Área de Asesoramiento Jurídico en el Ámbito del Medio Ambiente. A la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad corresponden, entre otras, las siguientes competencias: definir las políticas ambientales, de cambio climático y de sostenibilidad aplicables a los planes, programas y proyectos de la Generalitat, y coordinar e impulsar las actuaciones del Departamento como órgano ambiental en materia de planes, programas y proyectos; definir e impulsar las políticas de prevención y control de la calidad del aire y formular y realizar el seguimiento de los planes, los programas y las normativas sobre protección del ambiente atmosférico, acústico y lumínico; definir, dirigir y evaluar el funcionamiento global y la gestión del sistema de intervención integral que establezca el marco legal vigente, así como el sistema de evaluación de las actividades sometidas a declaración de impacto ambiental; coordinar las actuaciones de inspección de actividades con incidencia ambiental; promover proyectos de investigación en materia de tecnologías y sistemas para la evaluación, la prevención, la minimización y el control de los impactos de las actividades sobre el medio; dirigir el sistema de auditoría y gestión medioambiental y los sistemas de etiqueta ecológica europea y el distintivo de garantía de calidad ambiental; dirigir el sistema de acreditación de las entidades ambientales de control, verificación y certificación; promover y difundir la utilización de las energías renovables y las medidas de ahorro energético, y planificar la política relativa a la protección de la biodiversidad.

Por otro lado, mediante el Acuerdo del Gobierno 139/2011, de 11 de octubre, se ha aprobado la modificación de los Estatutos de la Empresa Forestal Catalana para adecuar su objeto social a la evolución del negocio de la empresa e incluir actividades económicas que ya se realizan como actividades complementarias y que se espera que tengan un peso cada vez más relevante en la cifra de negocios de la sociedad. Tras esta modificación, esta sociedad tiene por objeto producir y comercializar plantas y semillas destinadas a trabajos de reforestación o de restauración, y promover, preservar y mejorar la diversidad de los recursos genéticos forestales autóctonos; contratar y prestar servicios, asistencias técnicas, consultorías y trabajos de mantenimiento y desarrollo de programas de preservación y conservación de la flora y la fauna, y de gestión del medio natural y marino de interés general; proyectar, ejecutar, construir, conservar, explotar y

restaurar equipamientos, edificios e infraestructuras en espacios naturales, llevar a cabo trabajos silvícolas y de reforestación, luchar contra la erosión y tomar medidas de defensa contra aludes, y asumir el ejercicio complementario de cualquier actividad que se tenga que considerar parte o elemento necesario de las actividades anteriores y esté relacionada con estas; y realizar cualquier actividad relacionada con el ciclo del agua, la protección, administración y gestión de bosques y espacios naturales protegidos, la prevención y lucha contra incendios forestales y otros riesgos naturales, la gestión y explotación de actividades económicas vinculadas a recursos o valores medioambientales, y cualquier otra actividad relacionada, directa o indirectamente, con el medio ambiente, el desarrollo sostenible y el desarrollo territorial.

C. Otras normas de interés

En el período examinado también se ha aprobado el Decreto 391/2011, de 13 de septiembre, que establece el uniforme, el equipamiento, los distintivos, los elementos de acreditación y la imagen corporativa del Cuerpo de Agentes Rurales, con la finalidad de garantizar la identificación de las personas que son miembros de este cuerpo como agentes de la autoridad y el ejercicio de sus funciones con seguridad y eficacia.

2.2. La actividad de fomento: convocatoria de subvenciones y ayudas públicas en ámbitos diversos

En estos meses se han aprobado las bases reguladoras de diferentes ayudas y han visto la luz varias convocatorias de subvenciones y ayudas públicas en diferentes ámbitos relacionados con la protección del medio ambiente. Dentro del Departamento de Territorio y Sostenibilidad se encuentran la Resolución TES/1984/2011, de 25 de julio, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas a gestores de plantas de reciclaje de residuos de la construcción autorizadas en Cataluña para la producción y comercialización de árido reciclado de residuos de la construcción con marcado CE; y la Resolución TES/2208/2011, de 20 de septiembre, de convocatoria para el otorgamiento de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el fomento de actividades de formación y promoción del patrimonio cultural y el desarrollo local en L'Alt Pirineu i Aran, y de aprobación de las bases reguladoras que lo tienen que regir. Y dentro del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio

Natural cabe citar, entre otras, la Orden AAM/70/2011, de 26 de abril, por la que se convocan subvenciones para la financiación de actuaciones en la zona de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici para el año 2011; la Orden AAM/69/2011, de 26 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de las actuaciones de las agrupaciones de defensa forestal y sus federaciones, y se convocan las correspondientes a 2011; la Orden AAM/207/2011, de 12 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas al fomento de infraestructuras de biodigestión de purines porcinos, y se convocan las correspondientes al año 2011; la Orden AAM/208/2011, de 22 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la ejecución de proyectos de mejora de la gestión medioambiental de las explotaciones porcinas, y se convocan las correspondientes a 2011; la Orden AAM/233/2011, de 19 de septiembre, de modificación de la Orden AAR/562/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la diversificación económica de las zonas rurales del programa Leader de Cataluña relativas al período de programación 2007-2013, y se convocan las correspondientes al año 2010, y la Resolución AAM/2106/2011, de 26 de agosto, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal de convocatoria de las ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad privada del año 2011, correspondientes al capítulo 1 y a la sección 1.2 de gestión forestal conjunta.

En el ámbito del Departamento de Empresa y Empleo, también debe hacerse mención de la Resolución EMO/2136/2011, de 12 de septiembre, por la cual se aprueban las bases reguladoras del Plan Renova't de electrodomésticos, calderas y aparatos de aire acondicionado en Cataluña, y se hace pública la convocatoria para 2011, con el fin de fomentar la sustitución de estos aparatos y calderas por equipos con niveles de eficiencia energética superiores.

2.3. Algunas iniciativas ambientales de interés

Durante el período examinado, el Gobierno de la Generalitat ha aprobado el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los Edificios y Equipamientos de la Generalitat para el período 2011-2014. Asimismo, se han dado los primeros pasos para la elaboración del Plan de la Energía y del Cambio Climático de Cataluña 2012-2020 y se ha proseguido el proceso de elaboración del Plan de Apoyo al Tercer Sector Ambiental 2011-2014 y del Plan para la Mejora de la Calidad del Aire 2011-2015.

A. La aprobación del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los Edificios y Equipamientos de la Generalitat de Cataluña 2011-2014

El 30 de agosto de 2011 el Gobierno de la Generalitat aprobó el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los Edificios y Equipamientos de la Generalitat de Cataluña 2011-2014, que se enmarca tanto en el contexto actual de austeridad y contención presupuestaria como en el del futuro Plan de la Energía y del Cambio Climático 2012-2020, que tendrá como uno de sus ejes básicos el ahorro y la eficiencia energética. Este plan, que afectará a todas las dependencias del Gobierno y del sector público, tiene como objetivos reducir el consumo de energía, aumentar la eficiencia energética y disminuir la factura energética de la Administración catalana. Concretamente, prevé conseguir en 2014 un descenso del 12% en el consumo de energía y del 4,4% en la factura energética.

El Plan aprobado se estructura en dos fases de actuación, siendo el Instituto Catalán de Energía (ICAEN) la entidad responsable de su desarrollo. En la primera fase se revisarán las condiciones de los suministros de energía a los centros de consumo de la Generalitat y se hará un seguimiento de la facturación durante doce meses, con el fin de detectar las ineficiencias en la contratación de energía y la implantación de hábitos y prácticas más eficientes en el consumo de energía. En la segunda se realizará el diseño y la ejecución de un programa de inversiones para la mejora del ahorro y la eficiencia energética. Las inversiones en mejoras del ahorro y la eficiencia en los edificios públicos se canalizarán preferentemente a través de las empresas de servicios energéticos.

Las inversiones asociadas al Plan ascienden a 296 millones de euros, en los que se incluyen, por una parte, las actuaciones de sensibilización y formación, que correrán a cargo de la Generalitat y que supondrán una inversión de 1,25 millones de euros, y, por otra, las obras y actuaciones de mejora de las instalaciones, a cuenta de las empresas de servicios energéticos. En contrapartida, se espera conseguir un ahorro de 419,75 millones de euros en la factura energética final para el período 2011-2026, de los cuales 114,93 millones serán reducción del gasto corriente para las cuentas públicas y el resto se dedicarán a amortizar las inversiones de las empresas de servicios energéticos.

B. Primeros pasos para la elaboración del Plan de la Energía y del Cambio Climático de Cataluña 2012-2020

En estos últimos meses, la Generalitat ha iniciado el proceso de elaboración del Plan de la Energía y del Cambio Climático de Cataluña 2012-2020, con una estrecha colaboración entre el Departamento de Empresa y Empleo y el Departamento de Territorio y Sostenibilidad¹⁶.

Este plan, en coherencia con los importantes retos asumidos por la Unión Europea en materia de energía y cambio climático en este horizonte (objetivo “20-20-20”), recogerá la nueva orientación que el actual Gobierno de la Generalitat quiere imprimir a la política energética catalana, integrando los aspectos de mitigación del cambio climático relacionados con la energía. La pretensión no es otra que la de adecuar la política energética catalana al actual escenario europeo e internacional. Se prevén para ello diferentes ejes estratégicos; entre otros, las políticas de ahorro y eficiencia energética; las energías renovables como opción estratégica; la reducción de gases de efecto invernadero para contribuir a los compromisos del Estado español en el seno de la Unión Europea; la consolidación del sector de la energía como oportunidad de crecimiento económico; la mejora de la seguridad y de la calidad del suministro energético, y la sostenibilidad del nuevo modelo energético desde el punto de vista social, económico y ambiental.

En estos últimos meses, la Generalitat ha iniciado un proceso de participación pública para la elaboración de este plan, con el objetivo de hacer partícipes a los representantes de la sociedad civil catalana y recoger el máximo de información, opiniones y propuestas y sugerencias sobre esta temática a tener en cuenta en el proceso de elaboración del Plan y de su Plan de Acción 2012-2014. Para ello, durante el mes de

¹⁶ El 8 de marzo de 2011 el Gobierno de la Generalitat aprobó el encargo del consejero titular del Departamento de Empresa y Empleo de iniciar los trabajos conducentes a la elaboración de un nuevo plan de energía de Cataluña, con el año 2020 como horizonte, que recogiese las orientaciones en materia de energía del actual Gobierno. También el Pleno del Parlamento catalán, en la sesión de 24 de marzo de 2011, aprobó la Moción 8/IX, sobre política energética, que insta al Gobierno a presentar, durante el año 2011, el Plan de la Energía de Cataluña 2012-2020. Por su parte, el consejero de Territorio y Sostenibilidad también había anunciado a la Comisión de Territorio y Sostenibilidad del Parlamento catalán, en su comparecencia de 15 de febrero de este año, que el Gobierno impulsaría la elaboración de un plan de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero para el período 2013-2020, período coincidente con el de la planificación europea aprobada en el paquete legislativo de energía y clima. Finalmente, con la finalidad de optimizar esfuerzos e integrar políticas transversales en el conjunto de la acción de gobierno desde la fase de diseño, se ha optado por elaborar un único documento que recoja el Plan de la Energía y del Cambio Climático, a partir de la colaboración entre ambos departamentos de la Generalitat.

septiembre se han realizado diferentes reuniones sectoriales con los principales actores de los sectores de la energía y el medio ambiente (empresas de generación eléctrica; comercializadores de energía eléctrica y de gas natural; grupos ecologistas; asociaciones municipales y asociaciones de consumidores; entidades, asociaciones y empresas en el ámbito del medio ambiente, de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética; organizaciones empresariales y sindicales...). Asimismo, se ha creado una dirección específica de correo electrónico y se ha activado un formulario en la página web del Instituto Catalán de Energía para que todas las personas, instituciones y entidades interesadas en hacer aportaciones puedan utilizar este canal de comunicación para poder presentar ideas, sugerencias... Debe criticarse, sin embargo, que este proceso participativo para la elaboración del Plan se haya abierto cuando, en cierta medida, ya estaban fijados sus grandes ejes¹⁷.

Concluida esta fase, el proceso de elaboración del Plan deberá seguir su curso, hasta su aprobación por el Gobierno de la Generalitat. Posteriormente se iniciarán los trabajos preparatorios de su Plan de Acción 2012-2014, que desarrollará las actuaciones concretas que se llevarán a cabo en este período para alcanzar los objetivos fijados.

C. El Plan de Apoyo al Tercer Sector Ambiental 2011-2014 y el Plan de Mejora de la Calidad del Aire 2011-2015 continúan su andadura

Tal como se recogía en la crónica anterior de esta revista, en Cataluña están en trámite el Plan de Apoyo al Tercer Sector Ambiental 2011-2014 y el Plan de Mejora de la Calidad del Aire 2011-2015, cuyo proceso de elaboración ha continuado avanzando en estos últimos meses.

En cuanto al Plan de Apoyo al Tercer Sector Ambiental 2011-2014, una vez concluido el proceso de participación y diálogo con las asociaciones implicadas y los diferentes agentes sociales y económicos y profesionales y voluntarios¹⁸, el 12 de julio tuvo lugar la presentación del Plan, así como de los resultados del proceso participativo previo en una sesión presidida por el consejero de Territorio y Sostenibilidad. El objetivo principal de este plan es identificar líneas de actuación, medidas y acciones encaminadas a

¹⁷ Vid. el editorial del número 26, de septiembre de 2011, del *Bulletí Informatiu* del CEDAT (accesible en <http://www.cedat.cat/bulleti/html/cat/2011/setembre.htm> —último acceso el 15 de octubre de 2011—).

¹⁸ En este proceso participaron en total 160 personas, que representaban a 120 entidades diferentes.

promover, consolidar y fortalecer el asociacionismo y el voluntariado ambiental, así como reconocer la función social que realizan estas entidades. El documento, como ya se avanzaba en la crónica anterior, se estructura en cuatro ámbitos (las personas, las entidades, la sociedad y el medio), y en él se identifican los retos más importantes de las organizaciones sin ánimo de lucro existentes en Cataluña que actúan en diversos ámbitos relacionados con el medio ambiente. Estos retos se corresponden con los que identificaron y priorizaron las entidades ambientales presentes en el primer Foro del Tercer Sector Ambiental (necesidad de trabajo en red; mejora de la comunicación externa e interna; establecimiento de nuevas relaciones con la Administración; financiación de las entidades; implicación de la ciudadanía; construcción de una identidad común como sector; innovación organizativa; profesionalización del sector, y trabajo con otros ámbitos del tercer sector). Para afrontarlos, se proponen 16 líneas de actuación, desglosadas en 46 medidas y 147 acciones, con el horizonte temporal de 2014.

Con el fin de garantizar que este plan incide de manera efectiva en el impulso de este sector, se priorizan 14 actuaciones hasta el año 2014, que se impulsarán desde el Departamento de Territorio y Sostenibilidad. Son las siguientes: diseñar un programa de formación dirigido a los gestores de las entidades ambientales y a su voluntariado; promover la capacidad técnica necesaria para favorecer la internacionalización de las entidades a través de la participación en proyectos europeos; acordar una estrategia conjunta para que las entidades ambientales catalanas participen en el fondo del 0,7% del IRPF; crear espacios de relación entre el mundo económico y financiero y las entidades del tercer sector ambiental, para favorecer la búsqueda de patrocinadores; revisar el Registro de Entidades de Medio Ambiente y Sostenibilidad y simplificar el procedimiento de adhesión, en el marco de un registro único de entidades; realizar, con carácter periódico, estudios de caracterización del sector para poder hacer el seguimiento; definir un modelo de apoyo estratégico a las entidades desde la Administración; promover la creación de una plataforma virtual del sector y desarrollar el espacio reservado a las entidades en la web institucional; impulsar la presencia del tercer sector ambiental en los órganos consultivos y en los procesos de participación de la Generalitat; promover campañas de comunicación para dar a conocer la tarea social del sector; potenciar espacios de relación entre empresas y entidades; priorizar y divulgar proyectos con alto beneficio ambiental aplicables a contextos diversos;

identificar proyectos de innovación socioambiental, y favorecer la creación de espacios de intercambio de experiencias sobre el uso de las TIC en las entidades.

El Plan también incluye diferentes órganos e instrumentos de seguimiento y evaluación. La herramienta básica para el seguimiento del estado de ejecución del Plan son los planes de acción anuales, en los que se concreta el conjunto de acciones que se llevarán a cabo y los indicadores de acción que permitirán evaluar su grado de ejecución. Los órganos de seguimiento son la Comisión de Seguimiento, que colabora en el desarrollo del Plan y evalúa el grado de implantación de las diferentes medidas y acciones concretadas en los planes de acción anuales; la Comisión Interdepartamental de Seguimiento del Plan Nacional de Asociacionismo y Voluntariado, como órgano de coordinación interdepartamental, y la Mesa Local, con representantes de los diferentes entes locales, para realizar el seguimiento de la aplicación del Plan en el ámbito local.

Con relación al Plan de Mejora de la Calidad del Aire 2011-2015, durante estos meses ha continuado su tramitación, ha concluido el proceso participativo —abierto no solo a los diferentes agentes y actores sociales, sino a toda la población— y el Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha hecho públicas las propuestas recibidas en línea. Recientemente, el consejero de Territorio y Sostenibilidad presentó el documento base del Plan de Actuación 2011-2015, en el que se prevén las acciones mínimas a implantar en las zonas declaradas de protección especial con el objetivo de restablecer la calidad del aire de estas áreas respecto a las partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras y el dióxido de nitrógeno. Este documento se estructura en siete capítulos en los que se recogen una diagnosis de la calidad del aire —capítulo primero—; un inventario de emisiones de dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras, y la evaluación de su incidencia en la calidad del aire —capítulo segundo—; la descripción de las medidas del Estado —capítulo tercero—; la descripción de las medidas de la Generalitat —capítulo cuarto—; la descripción de las medidas de los entes locales —capítulo quinto—; la descripción de las medidas a adoptar en episodios ambientales de contaminación —capítulo sexto—, y los escenarios de emisiones e inmisiones estimadas para el año 2015 —capítulo séptimo—. Entre las medidas que se prevén para mejorar la calidad del aire se incluyen, por ejemplo, la implantación de un nuevo modelo de peajes verdes, con ventajas para los vehículos menos contaminantes; un sistema de etiquetado para los automóviles en función del grado de contaminación; la electrificación del parque de motocicletas urbanas, con el fin de impulsar la

implantación del uso de la moto eléctrica como vehículo de transporte alternativo a las motos convencionales; el mantenimiento y la mejora del sistema de bicicletas públicas y el impulso del uso de la bicicleta privada; el favorecimiento del intercambio modal, la diversificación energética y el uso racional del vehículo privado, y la reducción de emisiones de las centrales de generación eléctrica cuando se produzcan episodios de contaminación ambiental.

2.4. Las reformas legales que se avecinan: la próxima modificación de numerosas normas ambientales

A finales del pasado mes de mayo, el Gobierno de la Generalitat sorprendía con el anuncio de la tramitación de un anteproyecto de ley de simplificación, de agilidad y reestructuración administrativa y de promoción de la actividad económica que iba a suponer la modificación de más de 80 normas, entre ellas una veintena relacionadas con la protección del medio ambiente. Unos días después, en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* de 1 de junio se publicaba el anuncio de un período de información pública para presentar alegaciones a este anteproyecto que finalizaría el 20 de junio¹⁹ y que motivó una auténtica avalancha de alegaciones (un total de 2.344)²⁰.

Este anteproyecto de ley se justificaba en la necesidad de simplificar y racionalizar trámites administrativos que, según el Gobierno, obstaculizaban la actividad económica, y respondía a diversas finalidades, entre las que se citaban expresamente las siguientes:

¹⁹ Vid. el DOGC núm. 5891, de 1 de junio de 2011. Inicialmente se preveía que el plazo de información pública finalizaría el 9 de junio de 2011, pero posteriormente este plazo se amplió hasta el 20 de junio (vid. el DOGC núm. 5896, de 8 de junio).

²⁰ Resultan de interés las alegaciones presentadas en materia ambiental por algunas asociaciones ecologistas. Vid. las presentadas por Ecologistas en Acción de Cataluña (accesible en <http://www.ecologistesenaccio.cat/spip.php?article80> —último acceso el 15 de octubre de 2011—), Greenpeace España (accesible en <http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/110620%20A1%C2%B7legacions%20Greenpeace%20lleis%20omnibus%20final.pdf> —último acceso el 15 de octubre de 2011—) y la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, DEPANA (accesible en http://www.depana.org/data/documents/0107110958_allegacionsomnibusdpn.pdf —último acceso el 15 de octubre de 2011—). Asimismo, vid. los informes del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS) 2/2011, de 20 de junio, “Consideracions sobre les modificacions previstes a l’avantprojecte de llei òmnibus en referència a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats” (accesible en http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/informes/2011/informe_2_2011_def.pdf —último acceso el 15 de octubre de 2011—), y 3/2011, de 20 de junio, “Consideracions generals i sobre diverses normatives en l’àmbit de la sostenibilitat modificades per l’avantprojecte de llei òmnibus” (accesible en http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/informes/2011/informe_3_2011_def.pdf —último acceso el 15 de octubre de 2011—).

“aprimament de la legislació, facilitar la competitivitat i productivitat en l'àmbit econòmic, la racionalització administrativa i, finalment, donar cabuda a aquelles iniciatives legislatives que preveuen limitades modificacions en el seu articulat i que, per tant, comportarien un cost sobreafegit en el volum de tramitació parlamentària”²¹.

Las críticas a este anteproyecto no se hicieron esperar, tanto por la técnica legislativa utilizada (modificación a través de una única ley, en una sola votación, de más de 80 normas) como por la intensidad de las modificaciones previstas en muchos de los ámbitos afectados. Estas críticas motivaron que finalmente el Gobierno de la Generalitat, atendiendo las peticiones de los diferentes grupos parlamentarios, decidiera dividir el anteproyecto de Ley Ómnibus inicial en tres partes para facilitar la negociación durante su tramitación. De este modo, el Consejo Ejecutivo ha aprobado tres proyectos de ley actualmente en trámite en el Parlamento catalán²²: el de simplificación y mejora de la regulación, que modifica 30 leyes y 2 decretos de un total de 8 ámbitos; el de promoción de la actividad económica, que modifica 12 leyes y 4 decretos de 4 ámbitos diferentes, y el de agilidad y reestructuración administrativa, que modifica 32 leyes y 2 decretos. Los tres proyectos de ley responden, según el Gobierno, a la necesidad de simplificar la Administración de la Generalitat, reducir la legislación y agilizar y reducir los trámites administrativos con el fin de contribuir a la reactivación económica de Cataluña, objetivo prioritario fijado en el Plan de Gobierno 2011-2014.

Por lo que respecta a la materia ambiental, las modificaciones normativas en este ámbito se centran en los proyectos de ley de promoción de la actividad económica y de simplificación y mejora de la regulación. El primero de ellos recoge la modificación, entre otras normas, de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de Ordenación Ambiental del Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno; el Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Protección de los Animales; el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de los residuos; la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades; la Ley 22/2009, de 23 de diciembre, de Ordenación Sostenible de la Pesca en Aguas Continentales, y la Ley

²¹ *Vid.* la memoria preliminar para someter a consideración del Gobierno la tramitación del anteproyecto de Ley de simplificación, de agilidad y reestructuración administrativa y de promoción de la actividad económica.

²² Puede consultarse el contenido de estos tres proyectos de ley en el *Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya* núm. 104, de 7 de julio de 2011 (accesible en <http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b104.pdf> —último acceso el 15 de octubre de 2011—).

2/2010, de 18 de febrero, de Pesca y Acción Marítimas. Y el segundo, la modificación, entre otras, de la Ley 9/1995, de 27 de julio, de Regulación del Acceso Motorizado al Medio Natural; el Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña; la Ley 6/2009, de 28 de abril, de Evaluación Ambiental de Planes y Programas; la Ley 12/1981, de 24 de diciembre, por la que se establecen normas adicionales de protección de los espacios de especial interés natural afectados por actividades extractivas, y la Ley 4/1998, de 12 de marzo, de Protección del Cabo de Creus.

Habrà que esperar a ver cómo concluye la tramitación parlamentaria de estos tres proyectos de ley para valorar las modificaciones normativas que se producirán en materia ambiental, pero, sin duda, más allá de las críticas que suscita la técnica legislativa utilizada, van a producirse en un futuro próximo importantes modificaciones de la legislación ambiental catalana, algunas de gran trascendencia, como por ejemplo la de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de Actividades.

3. Derecho local ambiental

En el ámbito local también queremos destacar la aprobación de algunas ordenanzas de interés. En primer lugar, la nueva Ordenanza del Medio Ambiente de Barcelona, que deroga la anterior Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano de 1999. En segundo lugar, aumenta el número de ayuntamientos catalanes que están aprobando ordenanzas reguladoras de la intervención administrativa sobre las actividades en el marco proporcionado por la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de Actividades, sin esperar a su desarrollo reglamentario; u ordenanzas que regulen de forma más específica el régimen de comunicación ambiental previsto en la Ley 20/2009 o la intervención sobre las actividades inocuas, excluidas de la citada Ley. En tercer lugar, el Ayuntamiento de Banyoles ha aprobado una ordenanza de corte novedoso sobre eficiencia energética y energías renovables. Por último, también se menciona el Plan de Energía, Cambio Climático y Calidad del Aire de Barcelona 2011-2020, adoptado por el Ayuntamiento de Barcelona.

3.1. Una nueva ordenanza de medio ambiente para Barcelona

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, en sesión de 25 de febrero de 2011, aprobó el texto de la modificación de la Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano de Barcelona, que pasa a denominarse Ordenanza del Medio Ambiente de Barcelona²³. Su objeto es la protección del medio ambiente en el término municipal de Barcelona y su contenido hace referencia a los diferentes elementos del medio ambiente que son de competencia local y a los servicios atribuidos a los ayuntamientos por los artículos 84 y 86 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, por la normativa de régimen local y la normativa ambiental sectorial, y, en particular, por la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona, y por la Ley estatal 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona.

La aprobación de esta modificación responde a una doble razón. Por una parte, se persigue el objetivo principal de reordenar la estructura y la sucesión numérica de esta ordenanza. Se elige, por ello, una organización del articulado muy simple —similar a la del Código Civil de Cataluña, aunque más sencilla— por títulos, capítulos y artículos, optando por una numeración de tres dígitos. Así, la Ordenanza comienza por el artículo 11-1 (título 1, capítulo 1, art. 1), sin que la numeración refleje el número de secciones en que se dividen algunos capítulos. Este sistema deja abierta la numeración de cada título y de cada capítulo, de manera que las modificaciones y reformas que necesariamente deban afrontarse con posterioridad no afectarán al conjunto del articulado de la Ordenanza. De acuerdo con este nuevo planteamiento, la Ordenanza se estructura en 8 títulos (1, “Disposiciones generales”; 2, “Protección de la atmósfera”; 3, “Contaminación térmica y radiaciones ionizantes”; 4, “Contaminación acústica”; 5, “Gestión de aguas”; 6, “Gestión de residuos”; 7, “Espacios verdes y biodiversidad”, y 8, “Energía solar”), una disposición adicional, tres transitorias, una derogatoria y una final, y 6 anexos (de los títulos 2, 4, 5, 6, 7 y 8, respectivamente).

Por otra, se incorporan modificaciones sustantivas en determinados títulos, como los de protección de la atmósfera, contaminación acústica o espacios verdes y biodiversidad y energía solar, y se revisa y se actualiza el contenido de otros títulos. De esta forma se actualiza y se adecúa la Ordenanza a la legislación catalana, estatal y europea aprobada con posterioridad a la norma local. Asimismo, se adapta a las nuevas necesidades y problemáticas que la vida cotidiana plantea a los ciudadanos y a la Administración, y

²³ Publicada en el BOP de Barcelona de 2 de mayo de 2011.

regula nuevos ámbitos para dar respuesta a nuevas sensibilidades surgidas y responder a nuevos retos de futuro. Entre las novedades más destacables, pueden mencionarse la mayor regulación del ruido, que se acomete con la pretensión de dar respuesta a la creciente sensibilización social sobre la cuestión de la contaminación acústica y las molestias derivadas del ruido y a la demanda social de una mejor calidad ambiental en este ámbito; la incorporación de la regulación sobre energía solar fotovoltaica, que ya estaba siendo objeto de regulación en el momento de iniciar la reforma de la Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano y que se incorpora a la normativa ya consolidada en relación con la energía solar térmica; la unificación bajo un mismo título de la regulación de la gestión del agua, desde la captación, la distribución y el consumo de agua potable hasta la normativa sobre saneamiento de aguas residuales y pluviales; algunas previsiones en materia de residuos, por ejemplo, la especial atención a la gestión de escombros, y el fortalecimiento del régimen de protección, conservación y mantenimiento de los espacios verdes y, en especial, del arbolado como elemento vegetal constitutivo de estos espacios.

Se trata, en definitiva, de una ordenanza muy completa y avanzada que constituye un buen ejemplo de las posibilidades de regulación ambiental de que disponen los ayuntamientos, con interesantes planteamientos para avanzar hacia la sostenibilidad. Esta ordenanza puede servir, además, de modelo para otros municipios interesados en acometer regulaciones en materia de protección del medio ambiente.

3.2. Otras ordenanzas municipales de interés

En este período muchos municipios catalanes han seguido el camino ya tomado por otros, tal como señalábamos en la crónica anterior, y han aprobado ordenanzas adaptadas a la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control de Actividades, para regular la intervención administrativa sobre las actividades. Es el caso, por ejemplo, de los ayuntamientos de la Garriga²⁴, Ametlla del Vallès²⁵, Avinyonet de Puigventós²⁶ o Castellldans²⁷. Estas ordenanzas pretenden, en ausencia todavía de

²⁴ Ordenanza reguladora de la intervención integral de la Administración municipal en las actividades e instalaciones (BOP de Barcelona, de 3 de mayo de 2011).

²⁵ Ordenanza municipal de apertura de establecimientos y control de actividades (BOP de Barcelona, de 16 de mayo de 2011).

²⁶ Ordenanza reguladora de la apertura de establecimientos y control de actividades (BOP de Girona núm. 105, de 1 de junio de 2011).

desarrollo reglamentario de la Ley 20/2009, regular los regímenes de licencia ambiental y de comunicación ambiental previstos en la citada Ley, así como incorporar previsiones acerca de la intervención sobre las actividades inocuas —mayoritariamente se opta por sujetarlas a comunicación previa—, con el fin de facilitar la aplicación de estos mecanismos en el ámbito municipal y dotar de mayor seguridad jurídica a la actuación municipal.

Otros ayuntamientos han optado por regular exclusivamente el régimen de comunicación previa, bien regulando tanto el régimen de comunicación ambiental previsto en la Ley 20/2009 para las actividades recogidas en su anexo III como el régimen de comunicación para actividades inocuas no sujetas a tal Ley²⁸, bien centrándose exclusivamente en la comunicación para actividades inocuas²⁹.

Por último, vale la pena destacar la aprobación por parte del Ayuntamiento de Banyoles de la Ordenanza reguladora de la eficiencia energética y las energías renovables³⁰. Se trata de una iniciativa muy interesante, desde el nivel municipal, para impulsar las fuentes de energía renovables como estrategia clave para reducir la contaminación atmosférica, contribuyendo, en consecuencia, a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y al aprovisionamiento energético futuro.

El objeto de esta ordenanza es fomentar el uso racional de la energía en cualquiera de sus formas y promover la eficiencia con el fin de conseguir un mayor ahorro energético, posibilitar la implantación de sistemas relacionados con las energías renovables y establecer los mecanismos que permitan garantizar la necesaria calidad paisajística de estas instalaciones. Se sujetan a ella todos aquellos actos, actividades, establecimientos, servicios, edificios, aparatos e instalaciones (fijas o móviles) que, en su ejercicio, funcionamiento o utilización, sean sujetos activos o pasivos de alguna fuente de energía renovable, cualquiera que sea el titular, promotor o responsable, tanto si es persona

²⁷ Ordenanza para la protección y gestión del medio natural y reguladora de las actividades que se ejercen en el municipio de Castellldans (BOP de Lleida núm. 114, de 11 de agosto de 2011).

²⁸ Es el caso, por ejemplo, de la Ordenanza reguladora del régimen de comunicación previa de las actividades contempladas en el anexo III de la Ley 20/2009 y de las actividades inocuas no reguladas en la Ley 20/2009, del Ayuntamiento de Sant Martí de Llémena (BOP de Girona núm. 111, de 9 de junio de 2011).

²⁹ Es el caso, por ejemplo, de las ordenanzas municipales reguladoras del régimen de comunicación previa de las actividades inocuas de Esplugues de Llobregat (BOP de Barcelona, de 18 de mayo de 2011), Celler de Ter (BOP de Girona núm. 107, de 3 de junio de 2011), Viladrau (BOP de Girona núm. 119, de 22 de junio de 2011) y Borges Blanques (BOP de Lleida núm. 91, de 25 de junio de 2011).

³⁰ Publicada en el BOP de Girona núm. 109, de 7 de junio de 2011.

física como jurídica, particular o pública, y en lugar público o privado, abierto o cerrado en que esté situado. Esta ordenanza, integrada por doce artículos, una disposición transitoria y una disposición final, se estructura en tres títulos: en el primero, se fija su objeto, ámbito de aplicación y usos afectados; en el segundo, se regula la implantación de sistemas de energías renovables (obligaciones de comprobación y mantenimiento del propietario de la instalación y/o el titular de la actividad que se destine o acoja sistemas de energías renovables; mejor tecnología disponible; protección del paisaje urbano, y autorizaciones sectoriales), y, en el tercero, se determinan los responsables del cumplimiento de esta norma (el promotor de las obras, el constructor y los facultativos que proyectan y/o dirigen las obras, en el ámbito de sus facultades, así como el titular de las actividades que se desarrollan en los edificios o construcciones afectados por esta ordenanza) y se contienen algunas previsiones sobre inspecciones, requerimientos y régimen sancionador.

Se trata, en definitiva, de una norma novedosa que aborda un tema de gran interés y que pone de manifiesto las posibilidades de actuación de los ayuntamientos para instrumentar medidas de protección y regulación en materia ambiental, y el importante papel que pueden jugar para contribuir a obtener un mayor nivel de sostenibilidad y, en particular, para fomentar las actuaciones que puedan contribuir a optimizar el uso de las energías renovables.

3.3. Otras iniciativas destacables

Para finalizar esta crónica, quisiéramos mencionar también el Plan de Energía, Cambio Climático y Calidad del Aire de Barcelona 2011-2020. Se trata de un plan en el que confluyen en un marco único de actuación los dos grandes instrumentos que durante los últimos años han centrado las políticas sobre energía y reducción de la contaminación de Barcelona (el Plan de Mejora Energética de Barcelona y el Plan de Mejora de la Calidad del Aire). Este plan contiene una serie de medidas para la mejora de la eficiencia energética, el impulso de las energías renovables, la mejora de la calidad del aire de la ciudad y la reducción de las emisiones procedentes de gases de efecto invernadero. Se trata, en definitiva, de un instrumento de planificación estratégica, una hoja de ruta que debe guiar la gestión y aplicación de las medidas en este ámbito durante la próxima década y que debiera llevar Barcelona a una nueva cultura

energética.

Entre los objetivos principales de este plan se incluyen la reducción del consumo energético (1.678,85 GWh/año) y el aumento de las energías renovables, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (un ahorro de 709.005,17 t/año) y la mejora de la calidad del aire, con la reducción de emisiones de dióxido de nitrógeno y partículas PM10 (2.742,51 t/año de dióxido de nitrógeno y 288,08 t/año de partículas PM10). Esto se traduciría en un ahorro per cápita de energía final que representa el 9% del consumo energético de la ciudad en 2008; una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero equivalente a un 16% de las emisiones de 2008, y una reducción per cápita del 25% y del 41% de las emisiones de dióxido de nitrógeno y PM10, respectivamente, respecto de los valores de 2008. El Plan recoge, a estos efectos, 108 proyectos (25 —un 23%— sobre eficiencia energética, 20 —un 18%— sobre energías renovables, 32 —un 30%— sobre emisiones locales y 31 —un 29%— sobre gestión, comunicación y comportamiento), cuyo coste es de 688,36 millones de euros, de los cuales se estima que 216,82 los tendrá que aportar el Ayuntamiento de Barcelona.

Sumari. 1. Dret estatal aplicable a Catalunya. 1.1. Novetats d'interès en matèria nuclear. A. Una nova llei sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius. B. L'establiment de normes de protecció de les instal·lacions i els materials nuclears i de les fonts radioactives. 1.2. Una nova llei per regular residus i sòls contaminats. 1.3. La fixació de l'ordre de prioritats i el calendari per a l'exigència de la garantia financera obligatòria de riscos mediambientals. 1.4. Altres novetats en alguns sectors ambientals. A. Protecció de l'atmosfera. B. Aigües. C. Patrimoni natural i biodiversitat. D. Desenvolupament sostenible en el medi rural. 1.5. Novetats en l'àmbit organitzatiu. 1.6. Altres normes d'interès. A. Uns quants ajustaments en matèria de silenci administratiu i llicències locals d'activitat. B. Altres normes ambientals sectorials. 2. Dret i polítiques ambientals autonòmiques. 2.1. La normativa ambiental: aspectes més destacables. A. La Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i la seva projecció en matèria ambiental. B. Els canvis organitzatius: la reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. C. Altres normes d'interès. 2.2. L'activitat de foment: convocatòria de subvencions i ajudes públiques en àmbits diversos. 2.3. Unes quantes iniciatives ambientals d'interès. A. L'aprovació del Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica en Edificis i Equipaments de la Generalitat de Catalunya 2011-2014. B. Primers passos per a l'elaboració del Pla de l'Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020. C. El Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental 2011-2014 i el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire 2011-2015 continuen el seu camí. 2.4. Les reformes legals que s'atansen: la propera modificació de nombroses normes ambientals. 3. Dret local ambiental. 3.1. Una nova ordenança de medi ambient per a Barcelona. 3.2. Altres ordenances municipals d'interès. 3.3. Altres iniciatives destacables.

1. Dret estatal aplicable a Catalunya

L'activitat normativa desplegada per l'Estat en matèria de protecció del medi ambient durant el període objecte d'anàlisi (de maig a la primera quinzena d'octubre) ha estat intensa. Efectivament, en aquests mesos s'han aprovat dues lleis de gran transcendència (la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius; i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats), alhora que s'han modificat preceptes concrets d'altres lleis prèvies (en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació, aigües, soroll...), a fi de revisar les llicències municipals que s'hi han previst i suprimir les que es mantenen injustificadament d'acord amb el nou article 84 bis de la llei de bases de règim local, introduït per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible. Així mateix, com és habitual, s'ha adoptat un nombre important de normes reglamentàries en àmbits diversos (responsabilitat mediambiental, protecció de l'atmosfera, aigües, patrimoni natural i biodiversitat, desenvolupament sostenible en el medi rural...).

En aquest període continua evidenciant-se la conflictivitat competencial entre l'Estat i les comunitats autònomes en algun àmbit. Així ho posen de manifest el conflicte positiu de competència núm. 2900/2011, promogut pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb determinats preceptes del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire³¹; i el conflicte positiu de competència núm.

³¹ Aquest conflicte positiu de competència ha estat admès a tràmit pel Tribunal Constitucional mitjançant

3769/2011, promogut pel Govern de Canàries contra el Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desplegament del Llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades³².

1.1. Novetats d'interès en matèria nuclear

En aquest període, en matèria nuclear, han vist la llum la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius; i el Reial decret 1308/2011, de 26 de setembre, sobre protecció física de les instal·lacions i els materials nuclears, i de fonts radioactives.

A. Una nova llei sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius

La Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius, dictada a l'empara de l'article 149.1.8 CE, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva per dictar la legislació civil (a excepció del capítol III del títol I i de l'article 22.1, dictats a l'empara de l'article 149.1.6 CE, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva per dictar la legislació processal), s'aprova per regular la responsabilitat civil nuclear de conformitat amb els convenis internacionals de responsabilitat civil en matèria d'energia nuclear de 29 de juliol de 1960, modificat pels protocols de 28 de gener de 1964, de 16 de novembre de 1982 i de 12 de gener de 2004 (Conveni de París) i de 31 de gener de 1963 complementari a l'anterior, modificat pels protocols de 28 de gener de 1964, de 16 de novembre de 1982 i de 12 de gener de 2004 (Conveni de Brussel·les), la qual cosa es complementa amb l'establiment del règim específic de responsabilitat civil pels danys que puguin causar accidents en què s'involucrin materials radioactius que no siguin substàncies nuclears. Les dues esmenes noves als convenis de París i Brussel·les de 2004 són les que han justificat la revisió en profunditat d'alguns dels elements bàsics del règim de responsabilitat civil nuclear, i han fet necessària la modificació substancial de la legislació interna vigent per reflectir

la Providència de 7 de juny de 2011 (BOE núm. 143, de 16 de juny de 2011). *Vid.* també el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 4/2011, de 14 d'abril, sobre el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire (DOGC núm. 5920, de 14 de juliol de 2011).

³² Aquest conflicte positiu de competència ha estat admès a tràmit pel Tribunal Constitucional mitjançant la Providència de 19 de juliol de 2011 (BOE núm. 178, de 26 de juliol de 2011).

els canvis i concretar les estipulacions que, de conformitat amb les disposicions dels convenis, correspon als estats contractants determinar en les seves legislacions nacionals. La importància de les modificacions que caldria introduir en la Llei 25/1964, de 29 d'abril, l'especialitat de la matèria, la intervenció de diferents òrgans de l'Administració quant a les competències, i el fet que les actualitzacions d'aquest règim responen a necessitats i circumstàncies pròpies d'un àmbit que és independent de la resta de les matèries que es regulen en aquesta llei, n'han aconsellat la regulació mitjançant una norma específica.

Aquesta llei neix amb un doble objectiu. D'una banda, l'establiment del règim de responsabilitat civil per danys nuclears, sense perjudici del que estableixen els convenis de París i Brussel·les, les clàusules dels quals són directament aplicables a les instal·lacions nuclears i als transports de substàncies nuclears³³. De l'altra, l'establiment del règim específic de responsabilitat civil per danys causats per accidents que provoquen l'emissió de radiacions ionitzants que poguessin produir-se en el maneig, l'emmagatzemament i el transport de materials radioactius que no siguin substàncies nuclears³⁴.

Amb aquesta finalitat, s'estructura en un títol preliminar i en dos títols, una disposició derogatòria, sis disposicions finals i un annex. El títol preliminar preveu les disposicions de caràcter general de la llei: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. El títol I regula el règim de la responsabilitat civil per danys nuclears i s'estructura en tres capítols. El capítol I determina la forma i la quantia de la responsabilitat civil dels explotadors d'instal·lacions nuclears pels danys nuclears que es produeixin tant dins com fora del territori nacional. També s'hi preveuen els danys exclosos, les condicions sota les quals pot aplicar-se el dret de repetició de l'explotador responsable i la subsistència de la responsabilitat de l'explotador pels danys nuclears causats per substàncies nuclears

³³ Com es fa constar en l'exposició de motius de la llei, "La norma s'ha redactat de manera que, pel que fa als danys nuclears, al marge de les disposicions de caràcter general, només es regulen de forma expressa aquells aspectes que, de conformitat amb els convenis de París o de Brussel·les, queden a la iniciativa dels estats contractants en les seves legislacions nacionals, i remetent al text dels convenis per a tot allò que és d'aplicació directa".

³⁴ Pel que fa a la seva entrada en vigor, hem de tenir en compte que tindrà lloc en la data en què entri en vigor a Espanya el Protocol de 12 de febrer de 2004, pel qual es modifica el Conveni de responsabilitat civil per danys nuclears (Conveni de París) i el Protocol de 12 de febrer de 2004, pel qual es modifica el Conveni complementari de l'anterior (Conveni de Brussel·les), excepte el que estableix la disposició addicional segona, relativa a la modificació de l'impost de societats, la disposició addicional tercera, per la qual es modifica la Llei 25/1964, de 29 d'abril, sobre energia nuclear i la disposició final sisena, que modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, que entren en vigor l'endemà d'haver estat publicada al BOE.

extraviades o abandonades, així com quan hagin estat objecte de robatori o de furt. El capítol II del títol I regula l'obligació dels explotadors d'establir la garantia financera per la responsabilitat civil que li atribueix la llei i els procediments vàlids perquè s'estableixi. Finalment, el capítol III preveu el procediment per a la reclamació de les indemnitzacions, i remet a la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, sense perjudici de l'aplicació d'altres mecanismes de resolució de conflictes que puguin accelerar el pagament de les indemnitzacions a les víctimes. Finalment s'enumeren els terminis de garantia i la prescripció dels danys nuclears.

El títol II regula la responsabilitat civil pels danys que puguin ocasionar les instal·lacions radioactives a l'hora de manipular, emmagatzemar i transportar materials radioactius que no siguin substàncies nuclears, i estableix procediments diferenciats segons si els danys afecten persones, béns, o si són pèrdues econòmiques ocasionades pels danys; o el medi ambient. En l'annex figura l'assignació dels límits inferiors pels quals s'ha d'establir la garantia per respondre dels danys produïts pels materials radioactius que no siguin substàncies nuclears en funció de la seva activitat. En el cas que l'explotador d'una instal·lació radioactiva sigui un organisme de titularitat pública, no està obligat a establir cap garantia financera, però està obligat a satisfer les indemnitzacions que li corresponguin.

Finalment, hem de ressaltar que la disposició addicional primera ordena al Govern, en el termini de sis mesos i d'acord amb la Generalitat de Catalunya, que adequi el Pla Bàsic d'Emergència Nuclear per crear una estructura directiva coordinada per al Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona i el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona, en l'estructura orgànica de la Generalitat.

B. L'establiment de normes de protecció de les instal·lacions i els materials nuclears i de les fonts radioactives

El Reial decret 1308/2011, de 26 de setembre, sobre protecció física de les instal·lacions i els materials nuclears, i de les fonts radioactives, s'ha dictat a l'empara del que disposen les articles 149.1.25 i 29 de la CE, que atribueixen a l'Estat la competència sobre bases del règim miner i energètic i sobre la seguretat pública, sense perjudici de la possibilitat de la creació de policies per les comunitats autònomes en la forma que s'estableixi en els respectius Estatuts en el marc del que disposi la llei orgànica. El seu

fonament legal es troba en la Llei 25/1964, de 29 d'abril, sobre energia nuclear, que es refereix a les obligacions en matèria de protecció física i que disposa que les autoritats competents i els titulars han d'adoptar les mesures de prevenció i protecció necessàries per mantenir les condicions de seguretat física adequades en aquestes instal·lacions.

Aquesta norma té com a objecte establir el règim de protecció física de les instal·lacions nuclears, els materials nuclears i les fonts radioactives que s'hi especifiquen, que es trobin en territori espanyol o sota jurisdicció espanyola, a fi de proporcionar protecció contra el robatori, furt o una altra apropiació il·lícita de materials nuclears i fonts radioactives durant la seva utilització, emmagatzemament i transport; garantir l'aplicació de mesures adequades per localitzar i, segons correspongui, recuperar el material nuclear o les fonts radioactives que s'han perdut o robat; protegir les instal·lacions nuclears, els materials nuclears, i les fonts radioactives contra el sabotatge o qualsevol altra actuació il·legal que pugui tenir conseqüències radiològiques o perjudicar o alterar el funcionament normal de les instal·lacions; i mitigar o reduir al mínim les conseqüències radiològiques d'un sabotatge.

Les seves previsions s'apliquen a les instal·lacions nuclears; als materials nuclears durant la producció, utilització, manipulació, processament, emmagatzemament i transport pel territori espanyol, o a bord d'un vaixell o aeronau sota la seva jurisdicció, si aquest vaixell o aeronau està dedicat al transport per territori nacional o des del mateix territori; i a les fonts radioactives durant la seva producció, utilització, manipulació, processament, emmagatzemament i transport pel territori espanyol. No obstant això, no s'apliquen als materials nuclears ni a les fonts radioactives utilitzades o emmagatzemades per a la defensa o altres fins militars, ni a les instal·lacions nuclears destinades a aquests mateixos fins; ni als transports de fonts radioactives que es realitzen per via aèria i marítima, que es regeixen per una normativa específica. Es tracta, en definitiva, d'impedir que aquestes instal·lacions o materials puguin ser objecte de sabotatge, robatori o desviació per al seu ús indegut. Com estableix el preàmbul del Reial decret 1308/2011, "La protecció física de les instal·lacions i els materials nuclears, i de les fonts radioactives, té gran importància per a la protecció de la població i del medi ambient i per a la seguretat nacional i internacional; fa un paper fonamental en el suport als objectius de no-prolifерació nuclear i de lluita contra el terrorisme; i constitueix un instrument essencial per fer front als eventuais perills que poden plantejar l'apropriació indeguda, el tràfic i l'ús il·lícit de materials nuclears i radioactius, i el

sabotatge d'instal·lacions nuclears, que puguin donar lloc a l'alliberament de radioactivitat, o a la dispersió de contaminació radioactiva". D'aquí ve que aquest reial decret articuli una sèrie de mesures de prevenció i protecció necessàries per mantenir les condicions de seguretat física adequades de les instal·lacions i materials nuclears i les fonts radioactives. En particular, a més de determinar les autoritats competents i les seves competències en aquest àmbit, fixa les obligacions en matèria de protecció física de les instal·lacions nuclears, dels materials nuclears i els transports, i regula les autoritzacions de protecció física; i estableix les obligacions en matèria de protecció física de les fonts radioactives. També fixa les mesures de protecció física de les centrals i altres instal·lacions nuclears, així com de les fonts radioactives i dels transports de materials nuclears i fonts radioactives i incorpora unes quantes referències al tràfic il·lícit dels materials nuclears i radioactius. Inclou, així mateix, previsions sobre inspecció i control i infraccions i sancions administratives en aquest àmbit.

1.2. Una nova llei per regular residus i sòls contaminats

El 29 de juliol de 2011 es va publicar una llei important al BOE: la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats³⁵, que deroga l'anterior Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus, així com alguns preceptes de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos³⁶. Aquesta llei té majoritàriament el caràcter de legislació bàsica de protecció del medi ambient³⁷ i s'aprova a fi d'incorporar a l'ordenament

³⁵ Sobre aquesta norma podem veure els comentaris d'ALENZA GARCÍA, J. F., "Características, novedades y carencias en el Proyecto de (nueva) Ley de residuos y suelos contaminados", *Actualidad Jurídica Ambiental*, 11 de juliol de 2011 (accessible a <http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2011/07/2011_07_Alenza_residuos.pdf> [últim accés el 15 d'octubre de 2011]); i POVEDA GÓMEZ, P. i LOZANO CUTANDA, B., "Principales novedades de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados", *Diari La Ley* núm. 7702, 2011.

³⁶ D'acord amb la disposició derogatòria única, es deroga el capítol VII sobre règim sancionador i la disposició addicional cinquena de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos. La resta de preceptes, en el que no s'oposin a aquesta llei romanen vigents amb rang reglamentari (apartat 2).

³⁷ Amb l'excepció dels articles següents (d'acord amb la disposició final primera de la Llei 22/2011):

- Els articles 12.5, 14.3, la disposició transitòria segona i la disposició transitòria tercera, que tenen el caràcter de legislació sobre bases del règim jurídic de les administracions públiques, d'acord amb l'article 149.1.18 de la Constitució.

- Els articles 12.3.b), 26 i 46, apartats 2.j), 3.g) i 3.h), pel que fa al trasllat de residus des de països tercers o cap a països tercers no membres de la Unió Europea, que tenen el caràcter de legislació sobre comerç exterior, competència exclusiva de l'Estat, d'acord amb l'article 149.1.10 de la Constitució.

- Els articles 17.7, 20.4.b) i c), 23.2, 32.5.d), que es dicten a l'empara de l'article 149.1.11 de la Constitució, que atribueix a l'Estat la competència per dictar les bases de l'ordenació de les assegurances.

jurídic espanyol la Directiva 2008/98/CE del Parlament europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008 —transposició tardana, ja que el termini d'incorporació al dret nacional de la directiva va finalitzar el 12 de desembre de 2010. La necessària modificació del marc legislatiu intern en matèria de residus per adaptar-lo al dret europeu suposa també una oportunitat per introduir canvis, actualitzar i millorar el règim jurídic de la producció i gestió de residus previst en l'anterior Llei 10/1998, a la llum de l'experiència adquirida i de l'evolució de la política de residus.

La Llei 22/2011 té com a objecte “regular la gestió de residus impulsant mesures que en previnguin la generació i mitiguin els impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient associats a la seva generació i gestió, amb la millora de l'eficiència en l'ús dels recursos”. Així mateix, tal com succeïa en l'anterior llei de residus, també regula el règim jurídic de sòls contaminats.

La llei, integrada per 56 articles, s'estructura en 7 títols (títol I —“Disposicions i principis generals”—, títol II —“Instruments de la política de residus”—, títol III— “Producció, possessió i gestió dels residus”—, títol IV —“Responsabilitat ampliada del productor del producte”—, títol V —“Sòls contaminats”—, títol VI —“Informació sobre residus”— i títol VII —“Responsabilitat, vigilància, inspecció, control i règim sancionador”—), 15 disposicions addicionals, 8 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria única, 4 disposicions finals i 12 annexos.

El títol I de la Llei conté les disposicions i els principis generals i inclou l'objecte, l'àmbit d'aplicació, les definicions —majoritàriament procedents de la directiva i millors en relació amb la llei anterior, per la precisió més gran d'alguns conceptes— i les referències a la classificació i Llista europea de residus, així com als subproductes i al fi de la condició de residu. Una de les novetats importants és la desaparició del concepte de residu urbà, i ara es recullen tres categories de residus: els domèstics, els comercials i els industrials. També es determinen els principis de la política de residus, i es configura com a principi bàsic la protecció de la salut humana i el medi ambient; es formula una nova jerarquia de residus que explicita l'ordre de prioritat en les actuacions en la política de residus (prevenció en la generació, preparació per a la reutilització,

- Els articles 33.2, incís final i el 34.3 pel que fa a la inscripció de notes marginals en el Registre de la Propietat, que es dicten a l'empara de l'article 149.1.8, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria d'ordenació dels registres públics.

No tenen caràcter bàsic els articles 35.2 i 49.2, que són aplicables a l'Administració General de l'Estat.

reciclatge, un altre tipus de valoració, inclosa la valoració energètica, i eliminació); i es defineixen les competències administratives de l'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes i els ens locals, també es crea la Comissió de Coordinació en Matèria de Residus, adscrita al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, com a òrgan de cooperació tècnica i col·laboració entre les administracions competents en aquest àmbit.

El títol II està dedicat als instruments de la política de residus. S'hi regulen els plans i els programes de gestió de residus i els programes de prevenció de residus. També es preveu la possibilitat d'adoptar mesures i instruments econòmics, entre els quals destaquen els cànon aplicables a l'abocament de residus mitjançant dipòsit en abocador i a la incineració de residus domèstics.

En el títol següent es regula la producció, possessió i gestió de residus i s'especifiquen les obligacions dels productors i gestors de residus. L'objectiu ha estat doble: aconseguir més claredat i sistematització de les obligacions dels subjectes intervinents en la cadena de producció i gestió de residus; i simplificar les càrregues administratives sobre els operadors, i substituir part de les autoritzacions existents en l'anterior llei per comunicacions prèvies, en el context de liberalització i simplificació administrativa derivades de la directiva de serveis en el mercat interior.

El títol IV es dedica a la responsabilitat ampliada del productor del producte que, amb l'ús, es converteix en residu. D'aquesta manera, com preveu l'exposició de motius de la llei "els productors de productes que amb el seu ús es converteixen en residus queden involucrats en la prevenció i en l'organització de la gestió dels residus, de manera que es promou la reutilització, el reciclatge i la valoració de residus, d'acord amb els principis inspiradors d'aquesta nova legislació". La llei delimita l'àmbit d'aquesta responsabilitat, i estableix les obligacions a què, mitjançant el corresponent desplegament reglamentari, poden quedar sotmesos els productors, tant en la fase de disseny i producció dels productes com durant la gestió dels residus que deriven del seu ús. D'aquesta manera, s'amplia l'enfocament regulador, que ja no està centrat exclusivament en la gestió dels residus per preveure les fases anteriors i adopta un enfocament integral de tot el cicle de vida dels productes.

El Títol següent regula els sòls contaminats, com ja va fer la Llei 10/1998, si bé a la llum de l'experiència adquirida es matisa la determinació dels subjectes responsables de

la contaminació dels sòls. Com a novetat, la llei regula els inventaris de sòls contaminats i introdueix la recuperació voluntària de sòls.

El títol VI regula el Registre de Producció i Gestió de Residus, que és compartit i únic en tot el territori nacional i que incorpora la informació procedent dels registres de les comunitats autònomes; i l'arxiu cronològic del qual han de disposar les persones físiques o jurídiques registrades on s'ha d'anotar la informació relativa a les operacions de producció i gestió de residus. Així mateix, es recullen una sèrie d'obligacions d'informació en aquest àmbit, tant per a les persones físiques o jurídiques que hagin obtingut l'autorització o hagin realitzat una comunicació prèvia com per a les pròpies administracions públiques.

El títol VII regula la responsabilitat, la vigilància, la inspecció i control i el règim sancionador aplicable en aquest sector. En consonància amb la supressió de determinades autoritzacions administratives i la seva substitució per una comunicació prèvia a l'inici de les activitats, la llei reforça les potestats de les administracions públiques per a la inspecció, la vigilància i el control de les activitats relacionades amb els residus i els sòls contaminats. Quant al règim sancionador, el contingut de l'anterior Llei 10/1998 s'actualitza; es tipifiquen amb més precisió algunes infraccions administratives; es revisa la quantia de les sancions, atenent a la gravetat de les conductes; s'amplia la potestat sancionadora de les entitats locals; es recull la possibilitat d'adoptar mesures provisionals amb anterioritat a l'inici del procediment sancionador; s'incorporen mesures de restabliment de la legalitat ambiental, i s'introdueix l'obligació de reparar danys mediambientals en els termes de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.

Finalment, hem de tenir en compte que les comunitats autònomes han d'adaptar, al que estableix aquesta llei, les autoritzacions i comunicacions de les instal·lacions i activitats existents, o les sol·licituds i comunicacions que s'hagin presentat abans de la data d'entrada en vigor de la llei, en el termini d'un any des d'aquesta data.

1.3. La fixació de l'ordre de prioritat i el calendari per a l'exigència de la garantia financera obligatòria de riscos mediambientals

En matèria de responsabilitat ambiental, s'ha aprovat una norma molt important per a la implantació de l'exigència de la garantia financera obligatòria de riscos mediambientals:

l'Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, dictada a l'empara del que disposa l'article 149.1.23 CE. Aquesta norma estableix l'ordre de prioritats i el calendari per a l'aprovació de les ordres ministerials previstes en la disposició final quarta de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, en les quals s'ha de fixar la data a partir de la qual ha de ser exigible la garantia financera obligatòria de les activitats econòmiques i professionals de l'annex III de la mateixa llei. Recordem que, tot i que la Llei 26/2007 estableix per als operadors inclosos en l'annex III l'obligació de constituir garanties financeres per responsabilitat ambiental, fa dependre aquesta exigència de l'aprovació, pel Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, de les ordres que s'han d'aprovar a aquests efectes —amb l'acord previ de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics i prèvia consulta a les comunitats autònomes i als sectors afectats— i que han de fixar la data a partir de la qual ha de ser exigible la constitució d'aquesta garantia financera.

En aquest context, aquesta ordre ministerial estableix l'ordre de prioritats i el calendari gradual per a l'elaboració de les ordres ministerials per mitjà de les quals s'ha de fixar la data a partir de la qual ha de ser exigible la garantia financera obligatòria, que ha d'incloure la prioritització de les activitats econòmiques de l'annex III de la Llei 26/2007, a les quals s'ha d'exigir la dita garantia. Amb això es posen de manifest els terminis i calendaris previstos per l'Administració per al coneixement dels sectors afectats i l'increment de la seguretat jurídica en l'aplicació de la garantia financera de responsabilitat mediambiental.

Quant a l'ordre de prioritats per a l'exigència de la garantia financera obligatòria dels sectors d'activitat, s'estableix en l'annex. En funció del sector, s'associa un número a les activitats afectades que indica el nivell de prioritats. El nivell 1 indica el nivell de prioritats màxim; el 2, el nivell de prioritats mitjà; i el 3, el nivell de prioritats més baix. En el nivell 1 s'inclouen únicament dues instal·lacions de l'annex 1 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica de combustió superior a 50 MW i instal·lacions per a la valoració de residus perillosos, inclosa la gestió d'olis usats, o per a l'eliminació dels residus esmentats en llocs diferents dels abocadors, d'una capacitat de més de 10 tones per dia). S'adscriuen, així mateix, a aquesta categoria, els operadors inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en el qual intervinguin

substàncies perilloses, amb independència de la prioritat assignada al sector professional a què pertanyi cada un. En el nivell 2 es recullen les coqueries; el refinament de petroli; les instal·lacions químiques per a la fabricació, a escala industrial mitjançant transformació química, de sals com el clorur d'amoní, el clorat potàssic, el carbonat potàssic, el carbonat sòdic, els perborats i el nitrat argèntic; les instal·lacions químiques per a la fabricació d'explosius; les instal·lacions químiques que utilitzin un procediment químic biològic per a la fabricació de medicaments de base; instal·lacions per a la producció de fosa o d'acers bruts incloses les corresponents instal·lacions de fosa contínua d'una capacitat de més de 2,5 tones per hora; foses de metalls ferrosos amb una capacitat de producció de més de 20 tones per dia; instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos mitjançant aplicació de capes de protecció de metall fos amb una capacitat de tractament de més de 2 tones d'acer brut per hora; i abocadors de qualsevol tipus de residus que reben més de 10 tones per dia o que tinguin una capacitat total de més de 25.000 tones, excloent-ne els abocadors de residus inerts. I en el nivell III, que és el majoritari, la resta d'activitats de l'annex III de la Llei 26/2007.

En relació amb el calendari, es preveu que la publicació de les ordres ministerials a partir de les quals ha de ser exigible la constitució de la garantia financera obligatòria dels sectors d'activitat que estiguin classificats amb el nivell de prioritat 1 en l'annex, tindrà lloc entre els dos i tres anys següents a la data d'entrada en vigor d'aquesta ordre (30 de juny de 2011); els que estiguin classificats amb el nivell 2, entre els tres i cinc anys següents a la data esmentada; i els classificats amb el nivell 3, entre els cinc i vuit anys següents a aquesta data.

Així mateix, aquest calendari orienta sobre els terminis per a la realització, per part de l'operador, de les anàlisis de riscos mediambientals necessaris per calcular la quantia de la garantia financera prevista en el capítol III del Reial decret 2090/2008, de 22 de desembre, que aprova el Reglament de desplegament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre. Aquestes anàlisis de riscos han de dur-se a terme amb caràcter obligatori una vegada publicades les ordres ministerials esmentades, tal com estableix la disposició final primera del reglament esmentat, si bé els models d'informe de riscos ambientals tipus de cada sector o, si és el cas, la guia metodològica corresponent, s'han d'elaborar abans de les ordres esmentades.

1.4. Altres novetats en alguns sectors ambientals

En el període observat, a més de les novetats analitzades, en l'àmbit estatal s'han aprovat un gran nombre de normes sectorials ambientals. A continuació, s'assenyalen les principals normes reglamentàries —i també alguna amb rang de llei— aprovades en els sectors de protecció de l'atmosfera, aigües i patrimoni natural i biodiversitat i desenvolupament sostenible en el medi rural.

A. Protecció de l'atmosfera

En matèria de protecció de l'atmosfera, s'ha aprovat el Reial decret 687/2011, de 13 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 430/2004, de 12 de març, pel qual s'estableixen normes noves sobre limitació d'emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de grans instal·lacions de combustió, i es fixen determinades condicions per al control de les emissions a l'atmosfera de les refineries de petroli. Aquesta modificació del Reial decret 430/2004 es realitza a fi d'esmenar la incorporació incompleta de la Directiva 2001/80/CE del Parlament europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2001, sobre limitació d'emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de grans instal·lacions de combustió, a l'ordenament jurídic espanyol.

Els canvis que hi ha són tres. En primer lloc, es modifica l'article 5 del Reial decret 430/2004 per canviar l'àmbit temporal d'aplicació fixat, del 21 de març de 2004 al 27 de novembre de 2002. Ara es preveu que:

“Sense perjudici del que disposa la disposició transitòria quarta, en l'autorització substantiva inicial de construcció de les noves instal·lacions o, si no n'hi ha, en l'autorització substantiva inicial d'explotació d'aquestes, la sol·licitud de autorització se present abans del 27 de novembre de 2002, a condició que la instal·lació es posi en funcionament, com a molt tard, un any després de la data esmentada, s'han d'establir els valors límit d'emissió que corresponguin a les seves emissions de diòxid de sofre, d'òxids de nitrogen i de partícules, determinats d'acord amb el que estableix l'apartat A dels annexos III a VII”.

En segon lloc, es modifica la disposició transitòria tercera per adequar les seves previsions a la Directiva 2001/80/CE. Com que el Reial decret 430/2004 va entrar en

vigor després de la data d'aplicació de la directiva, sense preveure l'aplicació retroactiva, va deixar fora del seu àmbit d'aplicació les noves instal·lacions grans de combustió, i en particular, les turbines de gas, autoritzades després del 27 de novembre de 2002 i abans del 21 de març de 2004. Ara, amb la nova redacció de la disposició transitòria tercera, s'exclouen de l'aplicació del capítol II, les turbines de gas autoritzades amb anterioritat al 27 de novembre de 2002 o que hagin estat objecte de la sol·licitud d'autorització abans de la data esmentada, a condició que la instal·lació s'hagi posat en funcionament com a molt tard el 27 de novembre de 2003.

En tercer lloc, per ajustar-se al text de la directiva esmentada, aquest reial decret fa una redacció adequada de l'apartat 5.1 de la part A de l'annex VIII del Reial decret 430/2004, de 12 de març, pel que fa al mesurament en continu del contingut del vapor d'aigua dels gasos residuals.

Finalment, atès que no és possible establir el compliment des del 27 de novembre de 2002, aquest reial decret incorpora una disposició transitòria que fixa un termini d'adaptació de les autoritzacions, a fi que les instal·lacions afectades puguin complir el que disposa la Directiva 2001/80, a partir de l'entrada en vigor³⁸.

B. Aigües

En matèria d'aigües, el Govern ha aprovat el Reial decret llei 12/2001, de 26 d'agost, pel qual es modifica la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, per a l'aplicació del Conveni internacional sobre l'embarcament preventiu de vaixells i es regulen les competències autonòmiques en matèria de policia de domini públic hidràulic³⁹. Mitjançant aquest reial decret llei s'introdueix una nova disposició addicional (la catorzena) en el Text refós de la llei d'aigües, amb la finalitat de conferir,

³⁸ Aquesta disposició transitòria preveu que "Per a les noves instal·lacions, i en particular les turbines de gas, autoritzades, segons l'article [5 del Reial Decret 430/2004, de 12 de març](#), en el període comprès entre el 27 de novembre de 2002 i el 21 de març de 2004, o que hagin estat objecte d'una sol·licitud d'autorització en el període esmentat i posades en funcionament durant el període comprès entre el 27 de novembre de 2003 i el 21 de març de 2005, es disposa d'un termini d'un any, a comptar de l'entrada en vigor d'aquest reial decret, per revisar i, si és el cas, modificar-ne les autoritzacions, a fi d'adaptar-les al que s'estableix en aquest reial decret, sense perjudici del que disposa l'article [7.1](#) i en els apartats [A i B de l'annex VIII del Reial Decret 430/2004, de 12 de març](#)."

³⁹ Tingueu en compte la Resolució de 15 de setembre de 2011, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 12/2011, de 26 d'agost, pel qual es modifica la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, per a l'aplicació del Conveni internacional sobre l'embarcament preventiu de vaixells i es regulen competències autonòmiques en matèria de policia de domini públic hidràulic (BOE núm. 229, de 23 de setembre de 2011).

a les comunitats autònomes que ho tinguin previst en els estatuts d'autonomia, l'exercici de la competència executiva sobre les facultats de policia de domini públic hidràulic dins del seu àmbit territorial. Aquesta nova disposició addicional preveu que:

“En les conques hidrogràfiques intercomunitàries, correspon a les comunitats autònomes que tinguin prevista la competència executiva sobre les facultats de policia de domini públic hidràulic en els seus estatuts d'autonomia, l'exercici, dins del seu àmbit territorial, de les funcions assenyalades en l'apartat 2 de l'article 94 d'aquesta Llei⁴⁰, així com la tramitació dels procediments a què donen lloc les dites actuacions fins a la proposta de resolució.

En l'exercici d'aquestes funcions, serà aplicable als òrgans competents de les comunitats autònomes el que disposen els apartats 3 i 4 de l'article 94”.

Amb aquesta mesura, com posa de manifest l'exposició de motius, “es pretén dotar de més seguretat jurídica les relacions interadministratives en matèria d'aigües, tot això d'acord amb la doctrina recent del Tribunal Constitucional continguda en la Sentència 30/2011, de 16 de març”. També es procedeix a la declaració d'interès general de determinades obres d'infraestructures hidràuliques de modernització i consolidació de regadius a Huelva, per la necessitat urgent de racionalitzar l'ús de l'aigua de reg en aquestes zones, així com l'impuls necessari al desenvolupament d'aquestes zones rurals.

També s'ha aprovat, mitjançant el Reial decret 1219/2011, de 5 de setembre, dictat a l'empara de l'article 149.1.13 de la CE i d'acord amb el que disposa l'article 40.6 del Text refós de la llei d'aigües, el Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, amb el contingut inclòs en els annexos I i II del Decret 188/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat de Catalunya⁴¹. El seu àmbit territorial d'aplicació coincideix amb el del districte de conca fluvial de Catalunya, delimitat pel Decret català 31/2009, de 24 de febrer. Aquest reial decret preveu, a més, que les infraestructures hidràuliques promogudes per l'Administració General de l'Estat i previstes en el Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya han de sotmetre's, prèviament a la

⁴⁰ Es tracta de les funcions d'inspecció i de control del domini públic hidràulic; inspecció i vigilància del compliment de les condicions de concessions i autoritzacions relatives al domini públic hidràulic; realització d'aforaments, informació sobre crescudes i control de la qualitat de les aigües; inspecció i vigilància de les obres derivades de les concessions i autoritzacions de domini públic hidràulic; inspecció i vigilància de les explotacions de tots els aprofitaments d'aigües públiques, sigui quina en sigui la titularitat i el règim jurídic a què estan acollits; la direcció dels serveis de guarderia fluvial; i, en general, l'aplicació de la normativa de policia d'aigües i llits.

⁴¹ Sobre aquest Pla *vid.* la crònica “El dret ambiental a Catalunya” del número anterior d'aquesta Revista.

seva realització, a una anàlisi sobre la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental per part de l'Administració General de l'Estat. En tot cas, la seva construcció s'ha de supeditar a la normativa vigent sobre avaluació d'impacte ambiental, a les previsions pressupostàries i als corresponents plans sectorials, quan la seva normativa específica així ho prevegi. Amb l'aprovació d'aquest reial decret es conclouen els dubtes que s'havien suscitat entorn de l'efectiva vigència del Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, en la mesura que faltava la preceptiva aprovació pel Govern espanyol⁴².

C. Patrimoni natural i biodiversitat

En l'àmbit del patrimoni natural i la biodiversitat, en aquest període s'ha aprovat el Reial decret 649/2011, de 9 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 12/2008, d'11 de gener, pel qual es regulen la composició i el funcionament del Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals, i el Reial decret 948/2009, de 5 de juny, pel qual es determinen la composició, les funcions i les normes de funcionament del Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat. Aquestes modificacions obeeixen a la necessitat d'adaptar l'estructura del Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals i del Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat a la nova realitat del Ministeri, derivada de l'aprovació del Reial decret 1443/2010, de 5 de novembre, pel qual es desplega l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

També s'ha aprovat, mitjançant el Reial decret 1274/2011, de 16 de setembre, el Pla Estratègic del Patrimoni natural i de la Biodiversitat 2011-2017, en aplicació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i biodiversitat. Aquest Pla Estratègic es configura com a instrument de planificació de l'activitat de l'Administració General de l'Estat en la matèria i té com a objecte establir i definir objectius, accions i criteris que promoguin la conservació, l'ús sostenible i la restauració del patrimoni, els recursos naturals terrestres i marins, la biodiversitat i la geodiversitat. Amb una extensió de més de 200 pàgines al BOE, desplega el que estableix la Llei 42/2007 i s'estructura en un preàmbul, nou apartats (I —“Introducció”—, II —“Marc de referència”—, III —“Principis del pla estratègic”—, IV —“Perspectiva a llarg termini”—, V —

42 *Vid.* l'article d'Isabel CARO-PATÓN CARMONA, “Está aprobado el plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Catalunya?”, a *Revista Catalana de Dret Ambiental*, vol. 2, núm. 1, 2011. Accessible a <<http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/viewFile/190/669>> [últim accés el 15 d'octubre de 2011].

“Diagnòstic”—, VI —“Metes, objectius i accions del pla estratègic”—, VII —“Cooperació, col·laboració i coordinació entre administracions”—, VIII —“Integració sectorial”— i IX —“Estimació de les necessitats pressupostàries”—) i dos annexos (annex I —“Programa de seguiment”— i annex II —“Glossari”—). A més, s’alineja amb els compromisos assumits per Espanya en la matèria en l’àmbit internacional i comunitari, en especial els derivats del Pla Estratègic del Conveni sobre la Diversitat Biològica per al període 2011-2020, adoptat en la desena reunió de la Conferència de les Parts del Conveni i de l’Estratègia Europea sobre Biodiversitat ”La nostra assegurança de vida, el nostre capital natural: una estratègia de biodiversitat de la UE per a 2020”, adoptada per la Comissió Europea al maig de 2011.

Finalment, hem d’esmentar l’Ordre ARM/2417/2011, de 30 d’agost, per la qual es declaren zones especials de conservació els llocs d’importància comunitària marins de la regió biogeogràfica Macaronèsica de la Xarxa Natura 2000 i s’aproven les mesures de conservació corresponents. Aquesta ordre, dictada a l’empara de l’article 149.1.23 CE, té una doble finalitat. D’una banda, reuneix en una disposició tant la declaració de les zones especials de conservació esmentades com l’aprovació de les mesures de conservació d’aquestes zones, que inclouen la regulació d’usos i activitats i recomanacions, així com els corresponents plans de gestió, d’acord amb els criteris de conservació i protecció aplicables als llocs de la Xarxa Natura 2000, per a més claredat i seguretat jurídica. D’altra banda, també recull algunes previsions entorn de la gestió d’aquests espais. Correspon a la Direcció General de Medi Natural i Política Forestal la concessió de les autoritzacions i l’emissió d’informes que es requereixin en virtut de les mesures de conservació establertes, sense perjudici de les autoritzacions que puguin correspondre a altres administracions i el que disposa la disposició addicional primera de la Llei 42/2007, de 13 de desembre. I la Direcció General de Medi Natural i Política Forestal és la responsable de la posada en marxa de la gestió de les zones especials de conservació declarades per aquesta ordre, en coordinació amb les administracions públiques competents. També es preveu que el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí promogui la col·laboració entre les administracions públiques afectades per garantir que es compleixin els objectius de les mesures de conservació de les zones especials de conservació, de manera que aquesta col·laboració es podrà articular per mitjà de convenis entre les administracions implicades.

D. Desenvolupament sostenible en el medi rural

Recentment, el Consell de Ministres ha regulat, mitjançant el Reial decret 1336/2011, de 3 d'octubre —dictat a l'empara de l'article 149.1.13 CE—, el contracte territorial com a instrument per promoure el desenvolupament sostenible del medi rural, i ha incorporat aquesta figura a l'ordenament jurídic espanyol⁴³.

Els contractes territorials es conceben com un instrument de suport a les polítiques de desenvolupament rural sostenible, amb la intenció d'orientar i incentivar les activitats agràries, enteses en un sentit com més ampli millor, cap a la multifuncionalitat i la generació d'externalitats positives que contribueixin eficaçment a millorar els aspectes econòmics, socials i ambientals que configuren la sostenibilitat del medi rural, tot això sota l'aplicació d'un enfocament territorial. Amb els quals es pretén, com posa de manifest el preàmbul, “conformar un marc contractual mitjançant el qual els titulars de les explotacions agràries assumeixin desplegar un model d'activitat agrària que generi externalitats positives en els àmbits esmentats, i pel qual, en apreciació de l'interès públic de les dites externalitats, les administracions públiques competents les compensen, incentiven i retribueixen, com a forma de reconeixement per la societat dels serveis i prestacions de caràcter públic que generen les explotacions agràries més enllà de la retribució derivada de la venda en el mercat dels seus productes”.

Partint d'aquestes premisses, aquest reial decret té com a objecte regular amb caràcter bàsic els contractes territorials que subscriuen les administracions públiques amb els titulars de determinades explotacions agràries, com a instrument de suport al desenvolupament rural sostenible; i els contractes territorials de zona rural que formalitzin les administracions públiques competents amb els titulars de les explotacions agràries de les zones rurals incloses en el Programa de Desenvolupament

⁴³ Tot i que la normativa prèvia (la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural; i el Reial decret 752/2010, de 4 de juny, pel qual s'aprova el primer programa de desenvolupament rural sostenible per al període 2010-2014) ja preveia els contractes territorials de zona rural com a instrument d'articulació d'una política d'estat, el Reial decret 1336/2011 ara crea un marc de regulació més ampli i de caràcter més general per a la figura del contracte territorial, i el concep com a autèntica mesura o instrument de política econòmica general per al medi rural espanyol, que, amb caràcter versàtil, permeti orientar les activitats agràries des d'un punt de vista multifuncional, i aprofitar per retribuir-les i incentivar les noves possibilitats de finançament que d'ara endavant es presentin.

Rural Sostenible referit en l'article 5 de la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural. Aquests contractes, que poden ser individuals o per tipus homogenis, es configuren com un instrument formal que estableix el conjunt de compromisos subscrits entre una Administració pública i el titular d'una explotació agrària per orientar i incentivar la seva activitat en benefici d'un desenvolupament sostenible del medi rural; i la seva subscripció té caràcter voluntari, tant per a les comunitats autònomes que opten per posar-los en pràctica com per als titulars de les explotacions agràries. La finalitat que es persegueix, com anticipàvem, és la d'orientar l'activitat de les explotacions agràries a la generació d'externalitats positives que contribueixin al desenvolupament sostenible del medi rural. Les administracions públiques han de procurar orientar aquests contractes, entre altres, cap a les finalitats següents: evitar la despoblació del medi rural; implantar una activitat agrària multifuncional; crear i conservar l'ocupació en el medi rural; mantenir sistemes agraris tradicionals d'alt valor natural o cultural; conservar i restaurar la qualitat ambiental, el sòl, l'aigua, el patrimoni natural i la biodiversitat autòctona silvestre, la diversitat genètica agrària de base territorial, el paisatge rural i el patrimoni cultural, i contribuir a la consecució dels objectius de conservació dels espais de la Xarxa Natura 2000 o altres espais o àrees protegides.

Amb aquestes finalitats, aquest reial decret regula de forma detallada la tipologia i el contingut dels contractes territorials; els beneficiaris; la duració, els compromisos i les contraprestacions del contracte; les prioritats entre beneficiaris per a la subscripció dels contractes i nivells d'incentiu; i el procediment per subscriure els contractes, i l'informe anual de l'estat d'aplicació del contracte territorial que ha d'elaborar el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, a partir de la informació facilitada per les comunitats autònomes. Així mateix, també conté previsions específiques sobre els contractes territorials de zona rural previstos en la Llei 45/2007, de 13 de desembre, que s'emmarquen en el Programa de Desenvolupament Rural Sostenible aprovat pel Govern en aplicació de la llei esmentada, i que tenen per àmbit territorial específic les zones rurals incloses en aquest programa a iniciativa de les comunitats autònomes.

1.5. Novetats en l'àmbit organitzatiu

En l'àmbit organitzatiu, hem de destacar la regulació, per mitjà del Reial decret

1025/2011, de 15 de juliol, de la Comissió Delegada del Govern per al Canvi Climàtic, que ja s'havia creat per mitjà del Reial decret 608/2008, de 30 d'abril⁴⁴. Aquesta Comissió Delegada està integrada per la vicepresidenta d'Assumptes Econòmics i Ministra d'Economia i Hisenda, que l'ha de presidir; el vicepresident de Política Territorial i ministre de Política Territorial i Administracions Públiques; els ministres d'Assumptes Exteriors i de Cooperació, d'Interior, de Foment, d'Educació, d'Indústria, Turisme i Comerç, de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, de Sanitat, Política Social i Igualtat i de Ciència i Innovació; i els secretaris d'estat per a la Unió Europea, de Cooperació Internacional, de Defensa, d'Hisenda i Pressupostos, d'Economia, de Seguretat, de Transports, d'Habitatge i Actuacions Urbanes, de Comerç Exterior, d'Energia, de Canvi Climàtic, de Cooperació Territorial i d'Investigació. La Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic ha d'exercir les funcions de Secretaria de la Comissió Delegada del Govern per al Canvi Climàtic.

1.6. Altres normes d'interès

Per finalitzar l'anàlisi de la normativa estatal dictada en aquest període, hem de tenir en compte el Reial decret llei 8/2011, d'1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contrets per les entitats locals, de foment de l'activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa, d'interès, ja que modifica unes quantes lleis ambientals; així com altres normes reglamentàries dictades en sectors ambientals directament o indirectament relacionats.

⁴⁴ Encara que no té interès per a Catalunya, en matèria organitzativa també podem esmentar diverses ordres ministerials de 7 de juliol que han creat, complint l'article 4 de la Llei 48/1960, de 21 de juliol, de navegació aèria —modificat per la Llei 5/2010, de 17 de març— les comissions mixtes per a l'establiment de les servituds acústiques i el Pla d'Acció de l'aeroport d'Alacant, Bilbao, Gran Canària, Eivissa, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife Nord, València i Màlaga, com a òrgans col·legiats de caràcter interministerial, adscrit al Ministeri de Foment, a través de la Direcció General d'Aviació Civil (Ordres PRE/1921/2011, PRE/1922/2011, PRE/1923/2011, PRE/1924/2011, PRE/1925/2011, PRE/1926/2011, PRE/1927/2011, PRE/1928/2011, i PRE/1929/2011, respectivament). Més recentment, per mitjà de l'Ordre PRE/2686/2011, de 5 d'octubre, s'ha creat la Comissió de Seguiment Ambiental del nou aeroport de la Regió de Múrcia, prevista en l'apartat 5 de la Resolució de la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic, de 30 de març de 2010, per la qual es formula declaració d'impacte ambiental del projecte "Nou aeroport de la Regió de Múrcia, fase II".

A. Uns quants ajustaments en matèria de silenci administratiu i llicències locals d'activitat

El Reial decret llei 8/2011, d'1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contrets per les entitats locals, de foment de l'activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa, tot i que no es tracta d'una norma ambiental, conté previsions d'interès per a aquest àmbit en matèria de silenci administratiu i de llicències. En efecte, d'una banda, aquest reial decret llei, complint el mandat legal de l'article 40 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, fixa el sentit positiu del silenci administratiu en un bon nombre de procediments administratius iniciats a sol·licitud de la part interessada, entre els quals se'n troben uns quants en matèria ambiental, a fi de circumscriure el sentit negatiu del silenci administratiu als procediments en què ho exigeixin raons imperioses d'interès general. Així, per exemple, el silenci passa de ser negatiu a positiu en els procediments d'autorització d'agrupació d'instal·lacions regulats en l'article 12 de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efectes hivernacle; i d'autorització per als sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada per a la resta de les comunitats autònomes, regulat en l'article 7 de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos.

D'altra banda, modifica diverses lleis a fi de revisar les llicències municipals previstes en la legislació estatal i suprimir les lleis en què es considera que no concorren les raons enunciades pel nou article 84 bis de la llei de bases de règim local, introduït per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible. D'acord amb aquest precepte, "amb caràcter general, l'exercici d'activitats no s'ha de sotmetre a l'obtenció de llicència o a un altre mitjà de control preventiu. No obstant això, poden sotmetre's a llicència o a control preventiu les activitats que afectin la protecció del medi ambient o del patrimoni historicoartístic, la seguretat o la salut públiques, o que impliquin l'ús privatiu i l'ocupació dels béns de domini públic, sempre que la decisió de sotmetiment estigui justificada i resulti proporcionada. En cas d'existència de llicències o autoritzacions concurrents entre una entitat local i alguna altra Administració, l'entitat local ha de motivar expressament en la justificació de la necessitat de l'autorització o llicència l'interès general concret que es pretén protegir i que aquest no es troba cobert mitjançant una altra autorització existent". Mitjançant el Reial decret llei 8/2011, d'1 de juliol, es compleix la disposició addicional vuitena de la llei d'economia sostenible,

d'acord amb la qual, en el termini de sis mesos des de la seva entrada en vigor, el Govern avaluarà l'existència d'aquestes raons en les previsions existents sobre llicències locals d'activitat i, d'acord amb els resultats d'aquesta avaluació, presentaria en el mateix termini un projecte de llei de modificació de les normes en què no concorrin les raons esmentades, en què eliminaria la corresponent exigència de llicència, sense perjudici de la seva substitució per altres formes de verificació i control administratiu. I aquesta és una de les tasques del Reial decret llei 8/2011. Concretament, en matèria ambiental, es modifiquen el Text refós de la llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol; la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació; la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll; la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental; la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; i la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. Les referències efectuades en aquestes lleis a les llicències se substitueixen ara per expressions com "actuacions relatives als mitjans d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans" o semblants. De les modificacions efectuades cal destacar la supressió definitiva de la llicència municipal relativa a l'exercici d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses en els casos en què es requereixi autorització ambiental integrada, en la línia del que ja han fet la majoria de normes autonòmiques.

A banda de les modificacions concretes esmentades, la disposició addicional setena estableix que, a excepció de les autoritzacions que s'imposen en compliment de la legislació de patrimoni de les administracions públiques i d'armes i explosius, les mencions contingudes en la legislació estatal a les llicències o autoritzacions municipals relatives a l'activitat, el funcionament o l'obertura s'han d'entendre referides als diferents mitjans d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans, segons els principis de l'article 39 bis de la Llei 30/1992 i previstos en l'article 84.1 LBRL.

B. Altres normes ambientals sectorials

Així mateix, en aquest període s'han aprovat diverses normes reglamentàries, tant en matèries ambientals com en sectors directament o indirectament relacionats amb el medi ambient. Atès l'objectiu d'aquesta crònica, no podem enumerar-les totes, tot i que sí que destaquem el Reial decret 704/2011, de 20 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de

protecció de les infraestructures crítiques, en desplegament de la Llei 8/2011, de 28 d'abril; i algunes altres aprovades en matèria forestal (el Reial decret 1220/2011, de 5 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 289/2003, de 7 de març, sobre comercialització dels materials forestals de reproducció), marítima (el Reial decret 799/2011, de 10 de juny, pel qual s'estableixen les obligacions que incumbeixen al Ministeri de Foment en matèria de seguretat marítima i prevenció de la contaminació marina sobre vaixells espanyols; i el Reial decret 800/2011, de 10 de juny, pel qual es regula la investigació dels accidents i incidents marítims i la Comissió permanent d'investigació d'accidents i incidents marítims), de vehicles elèctrics (el Reial decret 648/2011, de 9 de maig, pel qual es regula la concessió directa de subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics durant el 2011, en el marc del Pla d'Acció 2010-2012 del Pla Integral d'Impuls al Vehicle Elèctric a Espanya 2010-2014), substàncies i mescles (el Reial decret 1237/2011, de 8 de setembre, pel qual s'estableix l'aplicació d'exempcions per raons de defensa, en matèria de registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i mescles químiques, d'acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, i en matèria de classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, d'acord amb el Reglament (CE) n. 1272/2008 del Parlament europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008) i biocides (l'Ordre PRE/2610/2011, de 27 de setembre, per la qual s'inclou la substància activa spinosad en l'annex I del Reial decret 1054/2002, d'11 d'octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre, l'autorització i la comercialització de biocides; i l'Ordre PRE/2421/2011, de 7 de setembre, per la qual s'amplia la inclusió de la substància activa diòxid de carboni al tipus de producte 18, en l'annex I del Reial decret 1054/2002, d'11 d'octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides).

Finalment, cal esmentar la Resolució de 2 d'agost de 2011, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 29 de juliol de 2011, pel qual s'aprova el Pla Estatal de Protecció Civil davant del Risc d'Inundacions; i la Resolució de 14 de juny de 2011, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual s'inclou l'hidrobiodièsel en l'annex de l'Ordre ITC/2877/2008, de 9 d'octubre, per la qual s'estableix un mecanisme de foment de l'ús de biocarburants i altres combustibles renovables amb fins de transport.

2. Dret i polítiques ambientals autonòmiques

El dret i la política ambiental catalanes han evolucionat poc en el període objecte d'anàlisi, circumstància que no ens ha d'estranyar si tenim en compte que ens trobem en els primers mesos de la legislatura i del camí del nou Govern sorgit de les eleccions al novembre de l'any passat, i que en aquests moments les preocupacions fonamentals se centren en l'aspecte econòmic i en l'adopció de mesures de contenció de la despesa pública.

Des del punt de vista normatiu, l'activitat ha estat pràcticament inexistente. El més destacable, en aquest període, és la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, presentada amb la llei de pressupostos de la Generalitat de 2011, i que, tot i que no té com a objecte principal la protecció ambiental, inclou una sèrie de mesures fiscals i financeres d'interès en aquest àmbit; i algunes normes de caràcter organitzatiu, relatives a la reestructuració dels dos departaments de la Generalitat que actualment aglutinen les competències ambientals (Territori i Sostenibilitat, i Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural).

També resulten d'interès algunes actuacions empreses com l'aprovació del Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica en els Edificis i Equipaments de la Generalitat de Catalunya 2011-2014; i l'inici del procés d'elaboració del Pla de l'Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020.

No obstant això, el més destacable a Catalunya en el període analitzat, al marge de les qüestions assenyalades, ha estat, sens dubte, el debat sorgit entorn de l'avantprojecte de Llei de simplificació, d'agilitat i de reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica —més conegut com a llei òmnibus—, sotmès a informació pública mitjançant l'Edicte del Departament de la Presidència de 26 de maig de 2011⁴⁵, i que posteriorment s'ha dividit en tres projectes de llei diferents, actualment en tràmit al Parlament de Catalunya.

2.1. La normativa ambiental: aspectes més destacables

Les normes ambientals aprovades a Catalunya durant els mesos en què se centra aquesta crònica són poques. És més, normes ambientals pròpiament dites no s'han aprovat en aquest període, sinó que únicament han vist la llum una llei, l'objecte de la qual és l'establiment de mesures fiscals i de mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques (la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres), però que modifica algunes normes ambientals; algunes normes de caràcter estrictament organitzatiu, i un decret que regula determinats aspectes del Cos d'Agents Rurals.

⁴⁵ Vid. el DOGC núm. 5891, d'1 de juny de 2011.

A. La Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i la seva projecció en matèria ambiental

La Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, inclou algunes previsions d'interès des de la perspectiva ambiental. En primer lloc, modifica l'article 15 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament d'infraestructures de gestió de residus i de cànon sobre la disposició dels residus desaprofitats, per canviar el tipus de gravamen dels cànon sobre la disposició de residus municipals desaprofitats. També suspèn durant dos anys l'aplicació del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció regulat per la secció II del capítol III de la Llei 8/2008, de 10 de juliol (disposició addicional 1a).

En segon lloc, modifica diversos preceptes del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (art. 69, 71, 72 i 74, disposició addicional 1a, 5a, 6a i 9a i annex 6), en relació amb el cànon de l'aigua. D'aquestes modificacions destaquen la fixació d'un consum bàsic de cent litres per persona i dia i d'una dotació bàsica d'aigua per habitatge de 9 m³; la pujada del cànon un 8,5% (el tipus de gravamen aplicable passa de 0,3999 euros/m³ a 0,4339/m³ per a consums iguals o inferiors a la dotació bàsica per habitatge); i la creació d'una tarifa social per a jubilats i aturats que no sobrepassen la dotació bàsica.

Finalment, també introdueix modificacions en una sèrie de taxes, entre les quals se n'inclouen unes quantes en l'àmbit de la protecció del medi ambient, com les d'emissió de les declaracions d'impacte ambiental i les resolucions que determinen la innecessarietat de sotmetre un projecte al procediment d'avaluació d'impacte ambiental; l'obtenció de l'etiqueta ecològica de la Unió Europea; els serveis d'autorització ambiental d'activitats; la prestació de serveis i realització d'activitats relatives a la zona de servitud de protecció; i la tramitació d'autoritzacions i concessions d'ocupació del domini públic maritimoterrestre o autoritzacions en l'àmbit de concessions en el domini públic maritimoterrestre.

B. Els canvis organitzatius: la reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

El Decret 336/2011, de 10 de maig, que deroga el 48/2011, de 4 de gener, ha reestructurat el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. En aquest departament, pel que ens interessa, es troba la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Aquesta Direcció General s'estructura en quatre subdireccions generals (Boscos; Biodiversitat; Activitats Cinegètiques i Pesca Continental; i Agents Rurals) i un Servei de Gestió de Recursos; i a aquesta direcció s'hi adscriuen el Consell de Caça de Catalunya, el Consell de Pesca Continental de Catalunya i els consells territorials de Pesca Continental i la Taula Intersectorial Forestal. A aquesta Direcció General corresponen, entre altres, les competències següents: formular directrius en matèria de medi natural, relatives a la seva conservació i gestió, avaluar el grau de conservació i protecció i assumir, si és el cas, la restauració i millora, així com formular projectes d'investigació en tecnologies relacionades amb el medi natural; dirigir el desenvolupament del Pla d'Espais d'Interès Natural i de l'Estratègia Catalana de Conservació i Ús Sostenible de la Diversitat Biològica, i participar en la revisió del Pla; promoure la declaració dels espais d'especial protecció, informar favorablement l'establiment del règim general i elaborar els plans especials de protecció d'aquests espais; dissenyar i dirigir les actuacions en matèria de protecció i foment dels terrenys forestals, parcs naturals, espais protegits i protecció dels animals i la flora, i vetllar per la protecció dels ecosistemes de Catalunya; dissenyar mesures en relació amb els terrenys forestals, els espais naturals protegits, els espais inclosos en la Xarxa Natura 2000, les reserves de caça i la resta d'equipaments destinats a la protecció i millora de les espècies animals; elaborar i tramitar plans especials de protecció, plans de gestió i altres instruments en relació amb els espais naturals protegits; coordinar les actuacions de vigilància, control i inspecció del medi natural; planificar les actuacions en matèria de prevenció d'incendis forestals i aplicar mesures de silvicultura preventiva; i aprovar els plans de millora per a l'exercici de l'activitat forestal, cinegètica i de pesca continental.

Per la seva banda, el Decret 342/2011, de 17 de maig, ha procedit a la reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, derogant l'anterior Decret 44/2011, de 4 de gener. Després d'aquesta reestructuració, aquest departament, a què s'adscriuen l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Agència de Residus de Catalunya, Aigües Ter-Llobregat i el Servei Meteorològic de Catalunya, manté la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb rang orgànic de secretaria general. D'aquesta Secretaria en depenen

les unitats següents: la Direcció General de Qualitat Ambiental (de la qual en depenen la Subdirecció General d'Intervenció i Qualificació Ambiental i la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica); la Direcció General de Polítiques Ambientals (de la qual en depenen la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental, la Subdirecció General d'Informació i Educació Ambiental l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i el Servei de Planificació de l'Entorn Natural) i l'Àrea d'Assessorament Jurídic en l'Àmbit de Medi Ambient. A la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat corresponen, entre altres, les competències següents: definir les polítiques ambientals, de canvi climàtic i de sostenibilitat aplicables als plans, programes i projectes de la Generalitat i coordinar i impulsar les actuacions del Departament com a òrgan ambiental en matèria de plans, programes i projectes; definir i impulsar les polítiques de prevenció i control de la qualitat de l'aire i formular i realitzar el seguiment dels plans, programes i normatives sobre protecció de l'ambient atmosfèric, acústic i lumínic; definir, dirigir i avaluar el funcionament global i la gestió del sistema d'intervenció integral que estableixi el marc legal vigent així com el sistema d'avaluació de les activitats sotmeses a declaració d'impacte ambiental; coordinar les actuacions d'inspecció d'activitats amb incidència ambiental; promoure projectes d'investigació en matèria de tecnologies i sistemes per a l'avaluació, prevenció, minimització i control dels impactes de les activitats sobre el mig; dirigir el sistema d'auditoria i gestió mediambiental i els sistemes d'etiqueta ecològica europea i el distintiu de garantia de qualitat ambiental; dirigir el sistema d'acreditació de les entitats ambientals de control, verificació i certificació; promoure i difondre la utilització de les energies renovables i les mesures d'estalvi energètic; i planificar la política relativa a la protecció de la biodiversitat.

D'altra banda, mitjançant l'Acord de Govern 139/2011, d'11 d'octubre, s'ha aprovat la modificació dels Estatuts de l'Empresa Forestal Catalana per adequar-ne l'objecte social a l'evolució del negoci de l'empresa i incloure activitats econòmiques que ja es realitzen com a activitats complementàries i que s'espera que tinguin un pes cada vegada més rellevant en la xifra de negocis de la societat. Després d'aquesta modificació, aquesta societat té com a objecte produir i comercialitzar plantes i llavors destinades a treballs de reforestació o de restauració, i promoure, preservar i millorar la diversitat dels recursos genètics forestals autòctons; la contractació i prestació de serveis, assistències tècniques, consultories, treballs de manteniment i desenvolupament de programes de preservació i conservació de la flora i la fauna, de gestió del medi natural i marí

d'interès general; projectar, executar, construir, conservar, explotar, restaurar equipaments, edificis i infraestructures en espais naturals, treballs silvícoles i de reforestacions, lluita contra l'erosió i defensa contra allaus i l'exercici complementari de qualsevol activitat que s'hagi de considerar part o element necessari de les activitats anteriors i hi estigui relacionada; i la realització de qualsevol activitat relacionada amb el cicle de l'aigua, la protecció, l'administració i la gestió de boscos i espais naturals protegits, la prevenció i lluita contra incendis forestals i altres riscos naturals, la gestió i l'explotació d'activitats econòmiques relacionades amb recursos o valors mediambientals i qualsevol altra activitat relacionada, directament o indirectament amb el medi ambient, amb el desenvolupament sostenible i amb el desenvolupament territorial.

C. Altres normes d'interès

En el període examinat també s'ha aprovat el Decret 391/2011, de 13 de setembre, que estableix l'uniforme, l'equipament, els distintius, els elements d'acreditació i la imatge corporativa del Cos d'Agents Rurals, amb la finalitat de garantir la identificació de les persones que en són membres com a agents de l'autoritat i l'exercici de les seves funcions amb seguretat i eficàcia.

2.2. L'activitat de foment: convocatòria de subvencions i ajudes públiques en àmbits diversos

En aquests mesos, s'han aprovat les bases reguladores de diferents ajudes i han vist la llum diverses convocatòries de subvencions i ajudes públiques en diferents àmbits relacionats amb la protecció del medi ambient. En el *Departament de Territori i Sostenibilitat* es troben la Resolució TES/1984/2011, de 25 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria d'ajudes a gestors de plantes de reciclatge de residus de la construcció autoritzades a Catalunya per a la producció i la comercialització d'àrid reciclatge de residus de la construcció amb marcatge; i la Resolució TES/2208/2011, de 20 de setembre, de convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment d'activitats de formació i promoció del patrimoni cultural i el desenvolupament local a l'Alt Pirineu i Aran, i d'aprovació de les bases reguladores que han de regir-la. I en el Departament d'Agricultura, Ramaderia,

Pesca, Alimentació i Medi Natural cal esmentar, entre altres, l'Ordre AAM/70/2011, de 26 d'abril, per la qual es convoquen subvencions per al finançament d'actuacions en la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per a l'any 2011; l'Ordre AAM/69/2011, de 26 d'abril, per la qual es convoquen les bases reguladores de les ajudes per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal i les seves federacions i es convoquen les corresponents a 2011; l'Ordre AAM/207/2011, de 12 d'agost, mitjançant la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes destinades al foment d'infraestructures de biodigestió de purins porcins i es convoquen les corresponents a 2011; l'Ordre AAM/208/2011, de 22 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes destinades a l'execució de projectes de millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines i es convoquen les corresponents a 2011; l'Ordre AAM/233/2011, de 19 de setembre, de modificació de l'Ordre AAR/562/2009, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya relatives al període de programació 2007-2013, i es convoquen les corresponents a 2010; i la Resolució AAM/2106/2011, de 26 d'agost, mitjançant la qual es fa públic l'acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria de les ajudes a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada de l'any 2011, corresponents al capítol 1 i a la secció 1.2 de gestió forestal conjunta.

En l'àmbit del Departament d'Empresa i Ocupació, també hem d'esmentar la Resolució EMO/2136/2011, de 12 de setembre, mitjançant la qual s'aproven les bases reguladores del *Pla Renova't* d'electrodomèstics, calderes i aparells d'aire condicionat a Catalunya, i es fa pública la convocatòria per a 2011, a fi de fomentar la substitució d'aquests aparells i calderes per equips amb nivells d'eficiència energètica superiors.

2.3. Unes quantes iniciatives ambientals d'interès

Durant el període examinat, el Govern de la Generalitat ha aprovat el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica dels Edificis i Equipaments de la de la Generalitat per al període 2011-2014. Així mateix, ha fet els primers passos per elaborar el Pla d'Energia i de Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 i ha prosseguit el procés d'elaboració del Pla

de Suport al Tercer Sector Ambiental 2011–2014 i del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire 2011–2015.

A. L’aprovació del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica en Edificis i Equipaments de la Generalitat de Catalunya 2011-2014

El 30 d’agost de 2011, el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica en Edificis i Equipaments de la Generalitat de Catalunya 2011-2014, que s’emmarca tant en el context actual d’austeritat i de contenció pressupostària com en el del futur Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic 2012-2020, que té com un dels seus eixos bàsics l’estalvi i l’eficiència energètics. Aquest Pla, que afecta totes les dependències del Govern i del sector públic, té com a objectius reduir el consum d’energia, augmentar l’eficiència energètica i disminuir la factura energètica de l’Administració catalana. Concretament, el 2014 preveu aconseguir un descens del 12% en el consum d’energia i del 4,4% en la factura energètica.

El Pla aprovat s’estructura en dues fases d’actuació, i l’*Institut Català d’Energia* (ICAEN) és l’entitat responsable de desplegar-lo. En la primera fase, s’han de revisar les condicions dels subministraments d’energia als centres de consum de la Generalitat i s’ha de fer un seguiment de la facturació durant dotze mesos, a fi de detectar les ineficiències en la contractació d’energia i la implantació d’hàbits i pràctiques més eficients en el consum d’energia. En la segona fase, s’ha de realitzar el disseny i l’execució del programa d’inversions per millorar l’estalvi i l’eficiència energètica. Les inversions en millores de l’estalvi i l’eficiència en els edificis públics s’han de canalitzar preferentment a través de les empreses de serveis energètics.

Les inversions associades al Pla ascendeixen a 296 milions d’euros, en els quals s’inclouen, d’una banda, les actuacions de sensibilització i formació, que van a càrrec de la Generalitat i que suposen una inversió d’1,25 milions d’euros, i, de l’altra, les obres i actuacions de millora de les instal·lacions, a compte de les empreses de serveis energètics. En contrapartida, s’espera estalviar 419,75 milions d’euros en la factura energètica final en el període 2011-2026, dels quals 114,93 milions han de ser reducció de la despesa corrent per als comptes públics i la resta s’han de dedicar a amortitzar les inversions de les empreses de serveis energètics.

B. Primers passos per a l'elaboració del Pla de l'Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020

En aquests últims mesos, la Generalitat ha iniciat el procés d'elaboració del Pla de l'Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, amb estreta col·laboració amb el Departament d'Empresa i Ocupació i el Departament de Territori i Sostenibilitat⁴⁶.

Aquest Pla, en coherència amb els importants reptes assumits per la Unió Europea en matèria d'energia i canvi climàtic en aquest horitzó (objectiu "20-20-20"), ha de recollir la nova orientació que l'actual Govern de la Generalitat vol imprimir en la política energètica catalana, i integrar els aspectes de mitigació del canvi climàtic relacionats amb l'energia. La pretensió no és cap altra que la d'adequar la política energètica catalana a l'actual escenari europeu i internacional. Per això, es preveuen diferents eixos estratègics; entre altres, les polítiques d'estalvi i eficiència energètica; les energies renovables com a opció estratègica; la reducció de gasos d'efecte d'hivernacle per contribuir als compromisos de l'Estat espanyol en el si de la Unió Europea; la consolidació del sector de l'energia com a oportunitat de creixement econòmic; la millora de la seguretat i de la qualitat del subministrament energètic, i la sostenibilitat del nou model energètic des del punt de vista social, econòmic i ambiental.

En aquests últims mesos, la Generalitat ha iniciat un procés de participació pública per a l'elaboració d'aquest Pla, amb l'objectiu de fer partícips als representants de la societat civil catalana i recollir el màxim d'informació, opinions i propostes i suggeriments sobre aquesta temàtica que s'ha de tenir en compte en el procés d'elaboració del Pla i del Pla d'Acció 2012-2014. Per això, durant el mes de setembre s'han realitzat diferents reunions sectorials amb els principals actors dels sectors de l'energia i el medi ambient (empreses de generació elèctrica; comercialitzadors d'energia elèctrica i de gas natural; grups ecologistes; associacions municipals i associacions de consumidors; entitats,

⁴⁶ El 8 de març de 2011 el Govern de la Generalitat va aprovar l'encàrrec del conseller titular del Departament d'Empresa i Ocupació d'iniciar els treballs conduents a l'elaboració d'un nou pla d'energia de Catalunya, amb l'any 2020 com a horitzó, que reculli les orientacions en matèria d'energia de l'actual Govern. També el Ple del Parlament català, en la sessió de 24 de març de 2011, va aprovar la Moció 8/IX, sobre política energètica, que insta el Govern a presentar, durant l'any 2011, el Pla de l'Energia de Catalunya 2012-2020. Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat també havia anunciat a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament català, en la seva compareixença de 15 de febrer d'enguany, que el Govern impulsaria l'elaboració d'un pla de mitigació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle per al període 2013-2020, període coincident amb el de la planificació europea aprovada en el paquet legislatiu d'energia i clima. Finalment, amb la finalitat d'optimitzar esforços i integrar polítiques transversals en el conjunt de l'acció de govern des de la fase de disseny, s'ha optat per elaborar un únic document que reculli el Pla d'Energia i Canvi Climàtic, a partir de la col·laboració entre ambdós departaments de la Generalitat.

associacions i empreses en l'àmbit del medi ambient, de les energies renovables i l'estalvi i eficiència energètica; organitzacions empresarials i sindicals...). Així mateix, s'ha creat una adreça específica de correu electrònic i s'ha activat un formulari al web de l'*Institut Català d'Energia* perquè totes les persones, institucions i entitats interessades a fer aportacions puguin utilitzar aquest canal de comunicació per presentar idees, suggeriments... Hem de criticar, no obstant això, que aquest procés participatiu per a l'elaboració del pla s'ha obert quan, en certa manera, ja estaven fixats els grans eixos del pla⁴⁷.

Conclusa aquesta fase, el procés d'elaboració del Pla ha de seguir el seu curs, fins que el Govern de la Generalitat l'aprovi. Posteriorment, s'han d'iniciar els treballs preparatoris del Pla d'Acció 2012-2014, que desplegarà les actuacions concretes que s'han de dur a terme en aquest període per assolir els objectius fixats.

C. El Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental 2011–2014 i el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire 2011–2015 continuen el seu camí

Tal com recollíem en la crònica anterior d'aquesta Revista, a Catalunya estan en tràmit el Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental 2011–2014 i el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire 2011–2015, el procés d'elaboració del qual ha continuat avançant en aquests últims mesos.

Quant al Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental 2011-2014, una vegada conclòs el procés de participació i diàleg amb les associacions implicades i els diferents agents socials i econòmics i professionals i voluntaris⁴⁸, el 12 de juliol va tenir lloc la presentació, així com dels resultats del procés participatiu previ en una sessió presidida pel Conseller de *Territori i Sostenibilitat*. L'objectiu principal d'aquest Pla és identificar línies d'actuació, mesures i accions encaminades a promoure, consolidar i enfortir l'associacionisme i el voluntariat ambiental, així com reconèixer la funció social que realitzen aquestes entitats. El document, com ja avançàvem en la crònica anterior, s'estructura en quatre àmbits (persones, entitats, societat i medi), i s'hi identifiquen els reptes més importants de les organitzacions sense ànim de lucre existents a Catalunya

⁴⁷ Vid. l'editorial del núm. 26, de setembre de 2011, del *Butlletí Informatiu* del CEDAT (accessible a <<http://www.cedat.cat/butlleti/html/cat/2011/setembre.htm>> [últim accés el 15 d'octubre de 2011]).

⁴⁸ En aquest procés, van participar en total 160 persones, que representaven 120 entitats diferents.

que actuen en diversos àmbits relacionats amb el medi ambient. Aquests reptes es corresponen amb els que van identificar i van prioritzar les entitats ambientals presents en el primer Fòrum del Tercer Sector Ambiental (necessitat de treball en xarxa; millora de la comunicació externa i interna; establiment de noves relacions amb l'Administració; finançament de les entitats; implicació de la ciutadania; construcció d'una identitat comuna com a sector; innovació organitzativa; professionalització del sector; i treball amb altres àmbits del tercer sector). Per afrontar-los, es proposen 16 línies d'actuació, desglossades en 46 mesures i 147 accions, amb l'horitzó temporal de 2014.

A fi de garantir que aquest Pla incideix de manera efectiva en l'impuls d'aquest sector, es prioritzen 14 actuacions fins al 2014, que ha d'impulsar el *Departament de Territori i Sostenibilitat*. Són les següents: dissenyar un programa de formació dirigit als gestors de les entitats ambientals i al seu voluntariat; promoure la capacitat tècnica necessària per afavorir la internacionalització de les entitats a través de la participació en projectes europeus; acordar una estratègia conjunta perquè les entitats ambientals catalanes participin en el fons del 0,7% de l'IRPF; crear espais de relació entre el món econòmic i financer i les entitats del tercer sector ambiental, per afavorir la recerca de patrocinadors; revisar el Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat i simplificar el procediment d'adhesió, en el marc d'un registre únic d'entitats; realitzar, amb caràcter periòdic, estudis de caracterització del sector per poder realitzar el seguiment; definir un model de suport estratègic a les entitats des de l'Administració; promoure la creació d'una plataforma virtual del sector i aprofitar l'espai reservat a les entitats en el web institucional; impulsar la presència del tercer sector ambiental en els òrgans consultius i en els espais de processos de participació de la Generalitat; promoure campanyes de comunicació per donar a conèixer la tasca social del sector; potenciar espais de relació entre empreses i entitats; prioritzar i divulgar projectes amb alt benefici ambiental aplicables a contextos diversos; identificar projectes d'innovació socioambiental, i afavorir la creació d'espais d'intercanvi d'experiències sobre l'ús de les TIC en les entitats.

El Pla també inclou diferents òrgans i instruments de seguiment i avaluació. L'eina bàsica per al seguiment de l'estat d'execució del Pla són els plans d'acció anuals, en els quals es concreta el conjunt d'accions que s'han de dur a terme i els indicadors d'acció que han de permetre avaluar-ne el grau d'execució. Els òrgans de seguiment són la

Comissió de seguiment, que col·labora en el desplegament del Pla i avalua el grau d'implantació de les diferents mesures i accions concretes en els plans d'acció anuals; la Comissió Interdepartamental de seguiment del Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat com a òrgan de coordinació interdepartamental; i la Taula local, amb representants dels diferents ens locals, per realitzar el seguiment de l'aplicació del Pla en l'àmbit local.

Amb relació al Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire 2011–2015, durant aquests mesos s'ha continuat la tramitació, s'ha conclòs el procés participatiu, obert no sols als diferents agents i actors socials, sinó a tota la població, i el Departament de Territori i Sostenibilitat ha fet públiques les propostes rebudes en línia. Recentment, el Conseller de Territori i Sostenibilitat ha presentat el document base del Pla d'Actuació 2011-2015, en el qual es preveuen les accions mínimes que s'han d'implantar en les zones declarades de protecció especial amb l'objectiu de restablir la qualitat de l'aire d'aquestes àrees respecte a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 microns i el diòxid de nitrogen. Aquest document s'estructura en set capítols, en què es recullen la diagnosi de la qualitat de l'aire —capítol primer—; l'inventari d'emissions de diòxid de nitrogen i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 microns, i l'avaluació de la seva incidència en la qualitat de l'aire —capítol segon—; la descripció de les mesures de l'Estat —capítol tercer—; la descripció de les mesures de la Generalitat —capítol quart—; la descripció de les mesures dels ens locals —capítol cinquè—; la descripció de les mesures que cal adoptar en episodis ambientals de contaminació —capítol sisè—; i els escenaris d'emissions i immissions estimades per a l'any 2015 —capítol setè. Entre les mesures que es preveuen per millorar la qualitat de l'aire s'inclouen, per exemple, la implantació d'un nou model de peatges verds, amb avantatges per als vehicles menys contaminants; un sistema d'etiquetatge per als automòbils en funció del grau de contaminació; l'electrificació del parc de motocicletes urbanes, a fi d'impulsar la implantació de l'ús de la moto elèctrica com a vehicle de transport alternatiu a les motos convencionals; el manteniment i la millora del sistema de bicicleta pública i l'impuls de l'ús de la bicicleta privada; l'afavoriment de l'intercanvi modal, la diversificació energètica i l'ús racional del vehicle privat, i la reducció d'emissions de les centrals de generació elèctrica quan hi hagi episodis de contaminació ambiental.

2.4. Les reformes legals que s'atansen: la propera modificació de nombroses normes

ambientals

A finals del passat mes de maig, el Govern de la Generalitat sorprenia amb l'anunci de la tramitació d'un avantprojecte de llei de simplificació, d'agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica que suposaria la modificació de més de vuitanta normes, entre les quals una vintena relacionades amb la protecció del medi ambient. Uns quants dies després, al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* d'1 de juny es publicava l'anunci d'un període d'informació pública per presentar al·legacions a aquest avantprojecte que finalitzaria el 20 de juny⁴⁹ i que va motivar una autèntica allau d'al·legacions (un total de 2.344)⁵⁰.

Aquest avantprojecte de llei es justificava en la necessitat de simplificar i racionalitzar tràmits administratius que, segons el Govern, obstaculitzaven l'activitat econòmica i responia a diverses finalitats, entre les quals s'esmentaven expressament les següents: "aprimament de la legislació, facilitar la competitivitat i productivitat en l'àmbit econòmic, la racionalització administrativa i, finalment, donar cabuda a aquelles iniciatives legislatives que preveuen limitades modificacions en el seu articulat i que, per tant, comportarien un cost sobreafegit en el volum de tramitació parlamentària"⁵¹. Les crítiques a aquest avantprojecte no es van fer esperar, tant per la tècnica legislativa utilitzada (modificació a través d'una única llei, en una única votació, de més de vuitanta normes), com per la intensitat de les modificacions previstes en molts dels

⁴⁹ *Vid.* el DOGC núm. 5891, d'1 de juny de 2011. Inicialment, es preveia que el termini d'informació pública finalitzaria el 9 de juny de 2011, però posteriorment aquest termini es va ampliar fins al 20 de juny (*vid.* el DOGC núm. 5896, de 8 de juny).

⁵⁰ Resulten d'interès les al·legacions presentades en matèria ambiental per algunes associacions ecologistes. *Vid.* les presentades per Ecologistes en Acció de Catalunya (accessible a <<http://www.ecologistesenaccio.cat/spip.php?article80>> [últim accés el 15 d'octubre de 2011]); Greenpeace Espanya (accessible a <<http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/110620%20A1%20%20B7legacions%20Greenpeace%20lleis%20omnibus%20final.pdf>> [últim accés el 15 d'octubre de 2011]); i la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, DEPANA (accessible a <http://www.depana.org/data/documents/0107110958_allegacionsomnibusdpn.pdf> [últim accés el 15 d'octubre de 2011]). Així mateix, *vid.* els informes del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) 2/2011, de 20 de juny, "Consideracions sobre els modificacions previstes a l'avantprojecte de llei omnibus en referència a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats" (accessible a <http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/informes/2011/informe_2_2011_def.pdf> [últim accés el 15 d'octubre de 2011]); i 3/2011, de 20 de juny, "Consideracions generals i sobre diverses normatives en l'àmbit de la sostenibilitat modificades per l'avantprojecte de llei omnibus" (accessible a <http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/informes/2011/informe_3_2011_def.pdf> [últim accés el 15 d'octubre de 2011]).

⁵¹ *Vid.* la Memòria preliminar per sotmetre a consideració del Govern la tramitació de l'avantprojecte de llei de simplificació, d'agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l'activitat econòmica.

àmbits afectats. Aquestes crítiques van motivar que finalment el Govern de la Generalitat, atenent les peticions dels diferents grups parlamentaris, decidís dividir l'inicial avantprojecte de llei òmnibus en tres parts per facilitar la negociació durant la tramitació. D'aquesta manera, el Consell Executiu ha aprovat tres projectes de llei actualment en tràmit al Parlament català⁵²: el de simplificació i millora de la regulació, que modifica 30 lleis i 2 decrets d'un total de 8 àmbits; el de promoció de l'activitat econòmica, que modifica 12 lleis i 4 decrets de 4 àmbits diferents; i el d'agilitat i reestructuració administrativa, que modifica 32 lleis i 2 decrets. Els tres projectes de llei responen, segons el Govern, a la necessitat de simplificar l'Administració de la Generalitat, reduir la legislació i agilitzar i reduir els tràmits administratius a fi de contribuir a la reactivació econòmica de Catalunya, objectiu prioritari fixat en el Pla de Govern 2011-2014.

Pel que fa a la matèria ambiental, les modificacions normatives en aquest àmbit se centren en els projectes de llei de promoció de l'activitat econòmica i de simplificació i millora de la regulació. El primer recull la modificació, entre altres normes, de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn; el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei de protecció d'animals; el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus; la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats; la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, i la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes. I el segon, entre altres, de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural; el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya; la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes; la Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives, i la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus.

Cal esperar veure com conclou la tramitació parlamentària d'aquests tres projectes de llei per valorar les modificacions normatives que hi ha d'haver en matèria ambiental,

⁵² Podeu consultar el contingut d'aquests tres projectes de llei en el *Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya* núm. 104, de 7 de juliol de 2011 (accessible a <http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b104.pdf>) [últim accés el 15 d'octubre de 2011].

però, sens dubte, més enllà de les crítiques que suscita la tècnica legislativa utilitzada, en un futur pròxim hi haurà importants modificacions de la legislació ambiental catalana i algunes de gran transcendència, per exemple la de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental.

3. Dret local ambiental

En l'àmbit local, també volem destacar l'aprovació d'algunes ordenances d'interès. En primer lloc, la nova ordenança del medi ambient de Barcelona, que deroga l'anterior Ordenança general del medi ambient urbà de 1999. En segon lloc, augmenta el nombre d'ajuntaments catalans que aproven ordenances reguladores de la intervenció administrativa sobre les activitats en el marc proporcionat per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats, sense esperar-ne el desplegament reglamentari; o ordenances que, de forma més específica, regulen el règim de comunicació ambiental previst en la Llei 20/2009 o la intervenció sobre les activitats innòcues, excloses d'aquesta llei. En tercer lloc, l'Ajuntament de Banyoles ha aprovat una ordenança nova, sobre eficiència energètica i energies renovables. Finalment també cal esmentar el Pla d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire de Barcelona 2011-2020, adoptat per l'Ajuntament de Barcelona.

3.1. Una nova ordenança de medi ambient per a Barcelona

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en sessió de 25 de febrer de 2011, ha aprovat el text de la modificació de l'ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona, que passa a anomenar-se ordenança del medi ambient de Barcelona⁵³. El seu objecte és la protecció del medi ambient al terme municipal de Barcelona i el seu contingut fa referència als diversos elements del medi ambient que són de competència local i als serveis atribuïts als ajuntaments pels articles 84 i 86 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, per la normativa de règim local i la normativa ambiental sectorial, i, en particular per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona i per la Llei estatal 1/2006, de 13 de març, del règim especial del municipi de Barcelona.

⁵³ Publicada al BOP de Barcelona de 2 de maig de 2011.

L'aprovació d'aquesta modificació respon a una doble raó. D'una banda, es persegueix l'objectiu principal de reordenar l'estructura i la successió numèrica d'aquesta ordenança. S'opta, per això, per una organització de l'articulat molt simple, semblant a la del Codi civil de Catalunya, encara que més senzilla, per títols, capítols i articles, amb una numeració de tres dígits. Així, l'ordenança comença per l'article 11-1 (títol 1, capítol 1, art. 1), sense que la numeració reflecteixi el nombre de seccions en què es divideixen alguns capítols. Aquest sistema deixa oberta la numeració de cada títol i de cada capítol, de manera que les modificacions i reformes que necessàriament hagin d'afrontar-se amb posterioritat no afecten el conjunt de l'articulat de l'ordenança. D'acord amb aquest nou plantejament, l'ordenança s'estructura en 8 títols (1 —“Disposicions generals”—, 2 —“Protecció de l'atmosfera”—, 3 —“Contaminació tèrmica i radiacions ionitzants”—, 4 —“Contaminació acústica”—, 5 —“Gestió d'aigües”—, 6 —“Gestió de residus”—, 7 —“Espais verds i biodiversitat”— i 8 —“Energia solar”—), 1 disposició addicional, 3 disposicions transitòries, 1 derogatòria i 1 final i 6 annexos dels títols 2, 4, 5, 6, 7 i 8, respectivament.

De l'altra, s'incorporen modificacions substantives en determinats títols, com els de protecció de l'atmosfera, contaminació acústica o espais verds i biodiversitat i energia solar; i es revisa i s'actualitza el contingut d'altres títols. D'aquesta manera s'actualitza i s'adequa l'ordenança a la legislació catalana, estatal i europea aprovada després de la norma local. Així mateix, s'adapta a les noves necessitats i problemàtiques que la vida quotidiana planteja als ciutadans i a l'Administració, i regula nous àmbits per donar resposta a noves sensibilitats sorgides i respondre a nous reptes de futur. Entre les novetats més destacables, podem esmentar la regulació més gran del soroll que hi ha, amb la pretensió de donar resposta a la creixent sensibilització social sobre la qüestió de la contaminació acústica i les molèsties derivades del soroll i a la demanda social d'una qualitat ambiental millor en aquest àmbit; la incorporació de la regulació sobre energia solar fotovoltaica, que ja era objecte de regulació en el moment d'iniciar la reforma de l'ordenança general del medi ambient urbà i que s'incorpora a la normativa ja consolidada en relació amb l'energia solar tèrmica; la unificació sota un mateix títol de la regulació de la gestió de l'aigua, des de la captació, distribució i consum d'aigua potable fins a la normativa sobre sanejament d'aigües residuals i pluvials; algunes previsions en matèria de residus, per exemple, l'especial atenció a la gestió de runes; i l'enfortiment del règim de protecció, conservació i manteniment dels espais verds i, en

especial, de l'arbratge com a element vegetal constitutiu d'aquests espais.

Es tracta, en definitiva, d'una ordenança molt completa, avançada i que constitueix un bon exemple de les possibilitats de regulació ambiental de què disposen els ajuntaments, amb interessants plantejaments per avançar cap a la sostenibilitat. Aquesta ordenança pot servir, a més, de model per a altres municipis interessats a dur a terme regulacions en matèria de protecció del medi ambient.

3.2. *Altres ordenances municipals d'interès*

En aquest període molts municipis catalans han seguit el camí d'altres, tal com assenyalàvem en la crònica anterior, i han aprovat ordenances, adaptades a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control d'activitats, per regular la intervenció administrativa sobre les activitats. És el cas, per exemple, dels ajuntaments de la Garriga⁵⁴, Ametlla del Vallès⁵⁵, Avinyonet de Puigventós⁵⁶ o Castellans⁵⁷. Aquestes ordenances, en absència encara de desplegament reglamentari de la Llei 20/2009, pretenen regular els règims de llicència ambiental i de comunicació ambiental previstos en la llei esmentada, així com incorporar previsions sobre la intervenció sobre les activitats innòcues —majoritàriament s'opta per subjectar-les a comunicació prèvia—, a fi de facilitar l'aplicació d'aquests mecanismes en l'àmbit municipal i dotar l'actuació municipal de més seguretat jurídica.

Altres ajuntaments han optat per regular exclusivament el règim de comunicació prèvia, bé regulant tant el règim de comunicació ambiental previst en la Llei 20/2009 per a les activitats recollides en l'annex III com el règim de comunicació per a activitats innòcues no subjectes a aquesta llei⁵⁸, bé centrant-se exclusivament en la comunicació per a

⁵⁴ Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions (BOP de Barcelona, de 3 de maig de 2011).

⁵⁵ Ordenança municipal d'obertura d'establiments i control d'activitats (BOP de Barcelona, de 16 de maig de 2011).

⁵⁶ Ordenança reguladora de l'obertura d'establiments i control d'activitats (BOP de Girona núm. 105, d'1 de juny de 2011).

⁵⁷ Ordenança per a la protecció i gestió del medi natural i reguladora de les activitats que s'exerceixen en el municipi de Calldans (BOP de Lleida núm. 114, d'11 d'agost de 2011).

⁵⁸ És el cas, per exemple, de l'Ordenança reguladora del règim de comunicació prèvia de les activitats previstes en l'annex III de la Llei 20/2009 i de les activitats innòcues no regulades en la Llei 20/2009, de l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena (BOP de Girona núm. 111, de 9 de juny de 2011).

activitats innòcues⁵⁹.

Finalment, val la pena destacar l'aprovació per part de l'Ajuntament de Banyoles de l'ordenança reguladora de l'eficiència energètica i les energies renovables⁶⁰. Es tracta d'una iniciativa molt interessant, des del punt de vista municipal, per impulsar les fonts d'energia renovables com a estratègia clau per reduir la contaminació atmosfèrica, i, en conseqüència, contribuir a reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, i l'aprovisionament energètic futur.

L'objecte d'aquesta ordenança és fomentar l'ús racional de l'energia en qualsevol de les seves formes i promoure'n l'eficiència a fi d'aconseguir un més estalvi energètic, possibilitar la implantació de sistemes relacionats amb les energies renovables i establir els mecanismes que permetin garantir la necessària qualitat paisatgística d'aquestes instal·lacions. S'hi subjecten tots els actes, activitats, establiments, serveis, edificis, aparells i instal·lacions, fixes o mòbils que, en el seu exercici, funcionament o utilització, siguin subjectes actius o passius d'alguna font d'energia renovable, sigui quina sigui el titular, promotor o responsable, tant si és persona física com jurídica, particular o pública, i en lloc públic o privat, obert o tancat en que estigui situat. Aquesta ordenança, integrada per dotze articles, una disposició transitòria i una disposició final, s'estructura en tres títols: en el primer, es fixa l'objecte, l'àmbit d'aplicació i els usos afectats; en el segon, es regula la implantació de sistemes d'energies renovables (obligacions de comprovació i manteniment del propietari de la instal·lació o el titular de l'activitat que es destini o aculli sistemes d'energies renovables; millor tecnologia disponible; protecció del paisatge urbà, i autoritzacions sectorials); i, el tercer, determina els responsables del compliment d'aquesta norma (el promotor de les obres, el constructor i els facultatius que projecten o dirigeixen les obres, en l'àmbit de les seves facultats, així com el titular de les activitats que duen a terme en els edificis o construccions afectats per aquesta ordenança) i conté algunes previsions sobre inspeccions, requeriments i règim sancionador.

Es tracta, en definitiva, d'una norma nova, que aborda un tema de gran interès i que posa de manifest les possibilitats d'actuació dels ajuntaments per instrumentar mesures

⁵⁹ És el cas, per exemple, de les ordenances municipals reguladores del règim de comunicació prèvia de les activitats innòcues d'Espugues de Llobregat (BOP de Barcelona, de 18 de maig de 2011), Cellera de Ter (BOP de Girona núm. 107, de 3 de juny de 2011), Viladrau (BOP de Girona núm. 119, de 22 de juny de 2011) i les Borges Blanques (BOP de Lleida núm. 91, de 25 de juny de 2011).

⁶⁰ Publicada en el BOP de Girona núm. 109, de 7 de juny de 2011.

de protecció i regulació en matèria ambiental i l'important paper que poden representar per contribuir a obtenir un nivell més gran de sostenibilitat i, en particular, per fomentar les actuacions que puguin contribuir a optimitzar l'ús de les energies renovables.

3.3. Altres iniciatives destacables

Per finalitzar aquesta crònica, voldríem esmentar també el Pla d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire de Barcelona 2011-2020. Es tracta d'un Pla en què conflueixen en un marc únic d'actuació els dos grans instruments que durant els últims anys han centrat les polítiques sobre energia i reducció de la contaminació de Barcelona (el Pla de Millora Energètica de Barcelona i el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire). Aquest Pla conté una sèrie de mesures per a la millora de l'eficiència energètica, l'impuls de les energies renovables, la millora de la qualitat de l'aire de la ciutat i la reducció de les emissions procedents de gasos d'efectes hivernacle. Es tracta, en definitiva, d'un instrument de planificació estratègica, un full de ruta que ha de conduir la gestió i l'aplicació de les mesures en aquest àmbit durant la pròxima dècada i que ha de portar Barcelona a una nova cultura energètica.

Entre els objectius principals d'aquest Pla s'inclouen la reducció del consum energètic (1.678,85 GWh/any) i l'augment de les energies renovables, la reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (un estalvi de 709.005,17 t/any) i la millora de la qualitat de l'aire, amb la reducció d'emissions de diòxid de nitrogen i partícules PM10 (2.742,51 t/any de diòxid de nitrogen i 288,08 t/any de partícules PM10). Això es traduiria en un estalvi per càpita d'energia final que representa el 9% del consum energètic de la ciutat el 2008; una reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle equivalent a un 16% de les emissions de 2008; i una reducció per càpita del 25% i del 41% de les emissions de diòxid de nitrogen i PM10, respectivament, respecte dels valors de 2008. El Pla recull, a aquests efectes, 108 projectes (25 —un 23%— sobre eficiència energètica, 20 —un 18%— sobre energies renovables, 32 —un 30%— sobre emissions locals i 31 —un 29%— sobre gestió, comunicació i comportament), el cost del qual és de 688,36 milions d'euros, dels quals s'estima que 216,82 els ha d'aportar l'Ajuntament de Barcelona.